

LOS GRUPOS PARAMILITARES EN CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ 1997 - 2005

Bernardo PÉREZ SALAZAR*
Iván Arturo TORRES A.**

1. Introducción

El comportamiento de los grupos paramilitares en Cundinamarca y Bogotá en años recientes ha sido errático y difícil de caracterizar. Al igual que ha sucedido en otras partes del país la comprensión de la aparición del paramilitarismo aquí, necesariamente requiere información acerca del contexto previo. Tanto el accionar de las estructuras insurgentes con presencia regional como la respuesta de la Fuerza Pública son determinantes. A diferencia de lo sucedido en otras regiones, el proyecto paramilitar fue muy accidentado e internamente conflictivo, hasta el punto de que nunca logró consolidarse plenamente, a pesar de que como en ninguna otra parte del país, las estructuras insurgentes en Cundinamarca y Bogotá fueron duramente golpeadas luego de su llegada.

Varias circunstancias contribuyeron a la inestabilidad del proyecto paramilitar en . Por una parte, la expansión del proyecto paramilitar en todo el país a partir de 1997 exigió recursos financieros que para su sostenimiento que eventualmente obligó el establecimiento de alianzas con el narcotráfico. En el centro del país, esta circunstancia coincidió además con un reacomodamiento de las áreas de producción de coca como resultado de las acciones represivas del *Plan Colombia* contra los cultivos ubicados en los departamentos del sur del país, particularmente Putumayo y Caquetá. En ese proceso cobraron especial importancia regiones como el centro del Departamento del Meta y el norte del Departamento de Guaviare, donde tuvo lugar una rápida expansión de cultivos de coca, mientras las operaciones del *Plan Patriota* dirigidas a cercar y aniquilar la fuerza principal de combate de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–, debilitó su presencia en esta región al igual que el control sobre las rutas de narcotráfico que operaban bajo su control. Esta coyuntura, unida al turbulento proceso de acercamiento entre las Autodefensas Unidas de Colombia con el gobierno para dialogar acerca de las condiciones de su desmovilización y reincorporación a la vida civil, habrían agudizado los conflictos entre las diversas facciones paramilitares con intereses en el centro del país hasta el punto de desatar una “guerra a muerte” entre ellas. Bogotá se convirtió por diversas razones en uno de los escenarios principales de esta guerra y el Frente Capital, la estructura local de las AUC en la ciudad resultó desmantelado como resultado de esta guerra sin cuartel.

Esta es la hipótesis que se argumenta en este capítulo. En un primer aparte de se describe en detalle el dispositivo y accionar militar que la FARC desarrolló en

* Investigador social. Corporación Nuevo Arco Iris. bperezsalazar@yahoo.com

** Director ejecutivo Fundación Cultural Rayuela. funrayuela@hotmail.com

Cundinamarca y particularmente alrededor de Bogotá a partir de la década de los 90. En un siguiente aparte, se describe la respuesta de la Fuerza Pública desde los últimos años de la década pasada para contrarrestar y obligar el repliegue insurgente. Luego, en un tercer aparte se intenta rastrear el origen de la presencia de las diversas agrupaciones paramilitares con influencia en la región, hasta la consolidación del Frente Capital en Bogotá. En un cuarto aparte, se describe la fractura de las estructuras regionales de la AUC a raíz del inicio de los diálogos con el gobierno en torno a la desmovilización de esta organización y el resultante desmantelamiento del Frente Capital. En un quinto y último aparte de conclusiones, se exploran algunos escenarios que podrían configurarse como resultado del accionar de las estructuras paramilitares que aún ejercen influencia en la región, con particular atención a la coyuntura de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales.

2. El despliegue de la FARC alrededor de Bogotá 1997- 2003

Luego de las operaciones *Centaurus I* y *Colombia* ejecutadas en noviembre y diciembre de 1990 por el gobierno de Gaviria (1990 – 1994) contra el Estado Mayor del Bloque Oriental –EMBO– y el Secretariado de la FARC, inició una etapa de dispersión y movilidad constante para los órganos de dirección de esa agrupación insurgente. En esta coyuntura, varias columnas móviles y compañías, que hasta entonces habían sido utilizadas por el Secretariado y el EMBO como reserva, se convierten en frentes¹ localizados alrededor de Bogotá:

- ✓ la compañía Jaime Pardo Leal se convierte en el frente 51 que tiene su área de operaciones en los municipios de Gutiérrez, Une, Fosca y en la localidad rural de San Juan de Sumapaz del Distrito Capital;
- ✓ la compañía Juan de la Cruz Varela se convierte en el frente 52 y localiza su área de operaciones en los municipios de Pasca, Arbeláez y la localidad rural de San Juan de Sumapaz en el Distrito Capital;
- ✓ la compañía José Antonio Anzoátegui se convierte en el frente 53 y localiza su zona de operaciones en los municipios de San Juanito y Calvario en el Meta y Paratebuena, Medina, Gachalá, Junín, Fómeque, La Calera, Guayabetal, Quetame y Cáqueza en Cundinamarca; posteriormente en 1996 se fortaleció la capacidad operativa insurgente en esta zona del Departamento con la llegada de compañía “Ernesto Ché Guevara” procedente del Caquetá, que centró sus acciones en los municipios de Quetame, Guayabetal, Gutiérrez, Medina y Paratebuena.
- ✓ la compañía Teofilo Forero de la cual se desprende el Frente 55, se ubica sobre el corredor entre el sur del Meta, Cundinamarca y el norte del Tolima²

¹ Un frente se refiere a un comando guerrillero que opera en una jurisdicción geográfica determinada. Dentro de la jurisdicción del frente hay elementos de 1) combate, 2) apoyo e 3) infraestructura. Usualmente el núcleo de cada frente es la unidad de combate, compuesta por una o varias compañías. Una columna consta de dos o más compañías. Una compañía consta de 50 a 55 guerrilleros, dividido en dos pelotones llamados guerrillas, que consta de aproximadamente 25 guerrilleros. Además de las unidades de combate, existen comisiones integradas por milicianos. La comisión financiera se encarga de recaudar impuestos. Además, hay comisiones de logística, de inteligencia, de orden público, de trabajo comunitario, y otras que pueden ser designadas por el comandante del frente. Ver Rabasa A. y P. Chalk, 2003. “El Laberinto colombiano. Las sinergias entre drogas y subversión y sus implicaciones para la estabilidad regional” en Pérez Salazar, B. (Coor.) *El laberinto colombiano. Propuestas para la resolución del conflicto*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia.

² Ver La Rotta, J. 1996. *Las finanzas de la subversión en Colombia. Una forma de explotar a la nación*. Bogotá: INCISE – Ediciones Los Últimos Patriotas, pp. 45 - 81.

Para mediados de los años 90, el Distrito Capital estaba rodeado por 6 frentes de la FARC: a los cuatro frentes ya descritos se sumaron el frente 25 –que anteriormente operaba en la zona del norte de Cundinamarca y el occidente de Boyacá y se ubicó sobre el corredor entre el sur del Meta y el Tolima–, y el frente 42, que inicialmente se había formado en el norte del Caquetá y sur el Guaviare (en zonas controladas por la FARC, a las cuales el Comando Conjunto de las Fuerzas Militares caracteriza como “generadoras de poder de combate”) y establecieron áreas de operación sobre los corredores viales por los cuales Bogotá se abastece por el sur y el occidente.³

Poco después el despliegue de la FARC se consolidó en el resto del Departamento, a través del frente 22 en el noroccidente, y el frente 54 en el oriente, apoyados con numerosas compañías móviles. (Ver Figura 1)

El frente 22 se estableció en la vertiente occidental de la Cordillera, en la parte occidental de las provincias de Rionegro, Gualivá y Sabana Occidente con influencia sobre el corredor del poliducto con el cual se abastece Bogotá de combustibles, al igual que el corredor hacia el norte del Tolima en la provincia de Bajo Magdalena. El dominio de este Frente sobre el norte de Cundinamarca se complementó con las compañías móviles “Policarpa Salavarrieta”, con injerencia sobre las zonas más altas de la provincia de Rionegro, (particularmente los municipios de El Peñón, Vergara, San Francisco, Paime, Subachoque, Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Pacho y Supatá), y la compañía móvil Manuela Beltrán con influencia en el sector del valle de Ubaté y en la vía de Bogotá a Tunja, (particularmente los municipios de Zipaquirá, Nemocón, Suesca, Lenguaque, Guachetá, San Cayetano, Villagómez, Simijaca, Susa, Tausa, Sutatausa, Chía, Cucunubá, Cajicá, Cogua, Carmen de Carupa, Tocancipá, Gachancipá, Sopó y Ubaté). Hacia finales del año 2001, aparecieron en esta área del departamento las compañías móviles “Estebán Ramírez” (particularmente en los municipios de La Palma, Yacopí, Topaipí y La Peña) y “Reinaldo Cuellar” (con influencia en los municipios de Villeta, Chaguaní, Guaduas y Guayabal de Siquima), ambas provenientes de la zona desmilitarizada del Caguán, donde el gobierno de Pastrana adelantaba diálogos de paz con negociadores de la FARC.

Por su parte, el frente 54 estableció su influencia en la provincia de Medina al oriente del Departamento, extendiendo su influencia hasta Bogotá y particularmente en la provincia de El Guavio (Gachalá, Gama, Gachetá, Guasca, Ubalá y Guatavita), en el período que coincidió con la construcción de la represa de generación de energía en ese sector. En 2001 llegó de la zona desmilitarizada del Caguán la columna móvil “Vladimir Esteven” para apoyar las operaciones del frente 54.

³ A mediados de los años 90, los analistas interpretaban que este dispositivo alrededor de Bogotá expresaba los siguientes objetivos estratégicos de la FARC: 1) Consolidar su control sobre áreas de cultivo de coca en regiones del sur occidente y oriente del país. El control de los recursos en estas áreas habilita a las guerrillas para aumentar su capacidad militar y ejercer presión sobre otras áreas. 2) Expandir su área de operaciones a todo el país para forzar al gobierno a dispersar sus fuerzas y reducir su habilidad para recuperar la iniciativa militar en el conflicto. La guerrilla busca expandirse hacia áreas económicamente estratégicas, como la zona petrolera en el valle del Magdalena Medio y las regiones más densamente pobladas del altiplano de la Cordillera Oriental. 3) Complementariamente, la FARC intenta controlar numerosos corredores estratégicos para unir su zona histórica de control territorial, localizada en el sur del Meta y norte del Caquetá con i) la Costa Pacífica, ii) el nororiente colombiano y iii) la frontera con Venezuela. 4) Aislar a Bogotá. La ciudad se encuentra situada a 2.600 metros de altitud en el altiplano de la Cordillera Oriental de los Andes y depende de un número reducido de carreteras –fácilmente controlables– para su comunicación terrestre con el mundo externo. 5) En su etapa final, la estrategia de la FARC contemplaría una operación ofensiva de gran escala, que culminaría en una insurrección general. Para este fin, la FARC estaría construyendo una red de apoyo urbano en Bogotá y otras ciudades. Ver Rabasa y Chalk, *Op. cit.*

A partir de mediados de la década de los 90, el dispositivo de la FARC en los alrededores de Bogotá llevó a una intensificación de la actividad armada varios escenarios estratégicos del Departamento, entre ellos el oriente, occidente, suroccidente de Cundinamarca, al igual que la periferia del Distrito Capital.

A continuación se presenta un breve recuento de lo que sucedió a partir la segunda mitad de la década de los 90 y la primera mitad de la década actual en estas zonas de Cundinamarca y Bogotá.

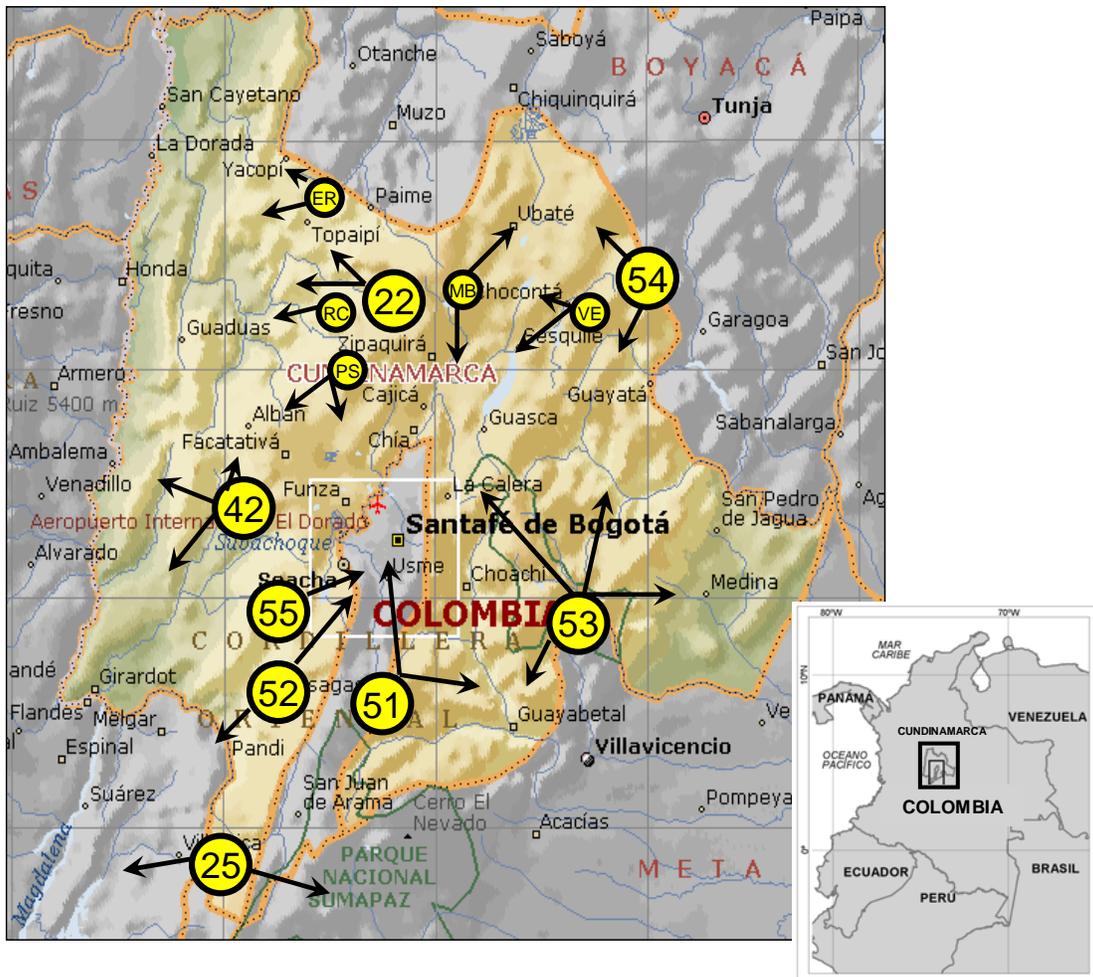


Figura 1: FARC- EP: Dispositivo de frentes en el alrededor de Bogotá a partir de la segunda mitad de la década de los años 90

Fuente: Vásquez, T. 2002 "Análisis del conflicto armado en Cundinamarca y Bogotá 1995 – 2001", Bogotá: CINEP – Mesa de Planificación Regional Bogotá- Cundinamarca.

2.1 La situación en el Oriente de Cundinamarca 1997 - 2004⁴

Desde 1995 las distintas estructuras de la FARC con influencia en el oriente de Cundinamarca emprendieron ataques contra inspecciones de policía en sitios de los municipios de Paratebuena, Junín, Choachí y Medina. Simultáneamente, hostiga y realiza sabotajes contra la infraestructura de peajes así como de la planta de asfaltos instalada por el proyecto de ampliación de vía Bogotá-Villavicencio. La presión extorsiva y los secuestros de ingenieros vinculados con la obra es tal que en Abril de 1997 la firma constructora del proyecto anuncia que estaría dispuesta a una terminación del contrato sin culminar la obra.

Durante el primer semestre de 1997 el Ejército emprendió operaciones intensas en el oriente de Cundinamarca, que generaron desplazamientos masivos de la población rural de los municipios de San Juntito y el Calvario en el Meta hacia las cabeceras de esos municipios. Para entonces las autoridades también habían detectado ésta área era utilizada por la FARC para mantener cautivas a víctimas de secuestros perpetrados en Cundinamarca y Meta. Ante la superioridad militar del Ejército, la actividad de la FARC durante el resto de ese año se orientó principalmente a atacar a la Policía mediante la toma de poblaciones (Fosca, Une, Quétame, Gutiérrez y Gachalá), hostigamientos contra puestos de Policía y emboscadas contra patrullas (Paratebuena, Junín, Choachí, Medina y Caqueza), a fin de restringir sus movimientos. (Ver Figura 2)

Durante el segundo semestre de 1997 la FARC inicia una campaña de hostigamiento para impedir las elecciones de mandatarios locales, secuestrando e intimidando los candidatos a Alcaldías y Concejos para que renuncien a sus candidaturas (Medina y Gachalá). En el mes de marzo de 1998 la FARC quema la papelería para las votaciones de las elecciones parlamentarias en Paratebuena y Medina. Como reacción a esta campaña sediciosa, se registran las primeras amenazas contra “auxiliadores de la guerrilla” en el oriente cundinamarqués atribuidas a “grupos paramilitares”.

Una escalada de acciones militares de la FARC tuvo lugar a mediados de 1998, y uno de sus escenarios fue Cundinamarca. Enfrentamientos entre guerrilleros y Ejército en inmediaciones del municipio de Gutiérrez a principios de julio de ese año dejaron un saldo de 46 guerrilleros y 17 soldados caídos en combate, fueron seguidos por una oleada de acciones de perturbación del orden público en esta zona del Departamento que finalmente fue neutralizada con la intervención aerotransportada de las Fuerzas Armadas.

Ante la ventaja de la movilidad aérea del Ejército, la FARC optó nuevamente por el ataque a unidades de Policía mediante la realización de retenes ilegales al igual que hostigamientos contra puestos y emboscadas a patrullas. Durante 1999 se registran combates y emboscadas contra la Fuerza Pública con concentraciones masivas de numerosas estructuras insurgentes: en julio de ese año tiene lugar una emboscada de una patrulla del Ejército en el municipio de Gutiérrez por los frentes 51, 53 y 54. Unos meses después hay combates en la localidad de San Juan de Sumapaz, en jurisdicción

⁴ Basado en Vásquez, T. 2002 “Análisis del conflicto armado en Cundinamarca y Bogotá 1995 – 2001”, Bogotá: CINEP – Mesa de Planificación Regional Bogotá- Cundinamarca; Observatorio de Derechos Humanos y DIH. 2001. *Panorama Actual de Cundinamarca*; Bogotá: Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH – Vicepresidencia de la República; y 2005. *Dinámica reciente de la confrontación armada en Cundinamarca*. Bogotá: Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH – Vicepresidencia de la República

Candado. Esta operación se intensificó a partir de la ruptura de los diálogos entre el gobierno Pastrana y la FARC y la terminación de esa zona desmilitarizada en Febrero de 2002. La respuesta de las estructuras de la FARC en el oriente Cundinamarca fue una campaña de atentados contra torres de conducción de energía eléctrica e incineración de vehículos de transporte público y carga pesada, principalmente en los municipios de Medina, Junín y Une al igual que Gachalá y Guachetá. También realizó un atentado contra la presa Golillas del sistema Chingaza que abastece a la ciudad de Bogotá con agua potable.

Luego de la terminación de los diálogos en febrero de 2002, el compás de aceleración que lograron las Fuerzas Militares en el área circunvecina a la zona de desmilitarizada del Caguán en sus operaciones contra las estructuras de la FARC, le permitió consolidar la iniciativa militar en la confrontación y obligó a la FARC a emprender un repliegue estratégico. En Cundinamarca la recuperación de la iniciativa militar por las Fuerzas Militares que se había logrado por medio de la Operación Aniquilador II en el área del Sumapaz, se consolidó mediante la Operación Libertad I que se inició a finales de 2002 y concluyó al término de 2003. En el oriente de Cundinamarca esta situación se reflejó en el incremento de enfrentamientos y combates con las estructuras de la FARC en Medina y Gachalá y su eventual repliegue hacía los sectores de montaña alta en esa área. No obstante, este repliegue fue acompañado con un acelerado incremento en acciones de desgaste para comprometer a la Fuerza Pública mediante enfrentamientos y combates en los municipios aledaños al corredor vial que une a Bogotá con Tunja, entre ellos, Sopó, Chía, Cajicá, Tocancipá, Suesca, Nemocón, Sutatausa y Cucunubá y Lenguaque, entre otros.

Los resultados exitosos de las operaciones del Ejército Nacional en Cundinamarca lograron la desarticulación o repliegue de las estructuras de la FARC presente en el departamento y la supresión de sus acciones en durante el año 2004.

2.2 Suroccidente de Cundinamarca⁵

El suroccidente del Departamento fue duramente disputado durante la segunda mitad de la década de los 90 entre los grupos armados al margen de la ley, con gran costo en vidas para la población civil asentada en esta área de Cundinamarca. La violencia intensa durante el período además coincidió con el proceso –a veces acompañado de amenazas violentas– de cambio de manos de la propiedad de la tierra en las zonas de clima medio de la vertiente occidental de la Cordillera, donde se registró la inversión de dineros presuntamente provenientes del tráfico de estupefacientes en fincas de altísima valorización por su fácil acceso desde Bogotá y atractivo como lugares de recreación⁶.

La mayor actividad insurgente registrada a mediados de la década de los 90 en esta parte del Departamento es atribuible al frente 42. En mayo de 1995 esta estructura

⁵ Ibid.

⁶ Según el Observatorio de Derechos Humanos y DIH (Op.cit., 2001: 6), las inversiones de narcotraficantes en Cundinamarca se registran en 43 municipios que representan el 37%, localizados principalmente alrededor de Bogotá, en fincas de altísima valorización por su cercanía a la capital (Mosquera, Funza, Madrid, Cota, Tenjo, Subachoque, Facatativá, Chía, Cajicá, Tabio, Sopó, Tocancipá, Nemocón, Cogua, Sibaté, La Calera y Choachí); al occidente de la sabana de Bogotá, hasta el río Bogotá (San Francisco, Supatá, La Vega, Sasaima, Villeta, Anapoima, La Mesa, Tena, El Colegio, Apulo, Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte, Chaguaní, San Juan de Rioseco, Beltrán, Nilo y Girardot); en la provincia de Sumapaz ha habido compras en Silvania, Fusagasugá, Tibacui y Arbeláez; al norte de la Sabana en Ubaté; al oriente en Gachalá y Gachetá, en la Provincia del Guavio, donde también se extraen esmeraldas.

intenta tomarse la cabecera del municipio de Silvana y es responsabilizada por numerosos secuestros de hacendados y dirigentes gremiales en su zona de influencia. En agosto de 1996 realiza ataques contra estaciones de policía en los municipios de Viotá y Jerusalén y en febrero de 1997 la misma estructura se toma la cabecera del municipio de Viani y apoya operaciones similares en el municipio de Cabrera entre julio y septiembre de ese año.

Los hostigamientos y contactos armados con el Ejército y la Policía se intensifican a partir de 1997 en los municipios de Cabrera, Pandí, Pasca, la localidad rural de San Juan de Sumapaz del Distrito Capital, Fusagasugá, Silvana, Sibaté, Viotá, Tibacuy. Durante el segundo trimestre de este año, las estructuras de la FARC realizan acciones violentas para impedir las elecciones de mandatarios locales en zona. Durante los primeros meses de 1998 se registra una incursión contra la Policía en la cabecera de Tocaima, y luego en los municipios de San Bernardo y Venecia se perpetra el secuestro de los alcaldes por la FARC. En Pandí el alcalde, el tesorero y el secretario de gobierno fueron amenazados de muerte. En julio de 1999 el frente 42 ataca la Estación de Policía en Viotá. (Ver Figura 3).

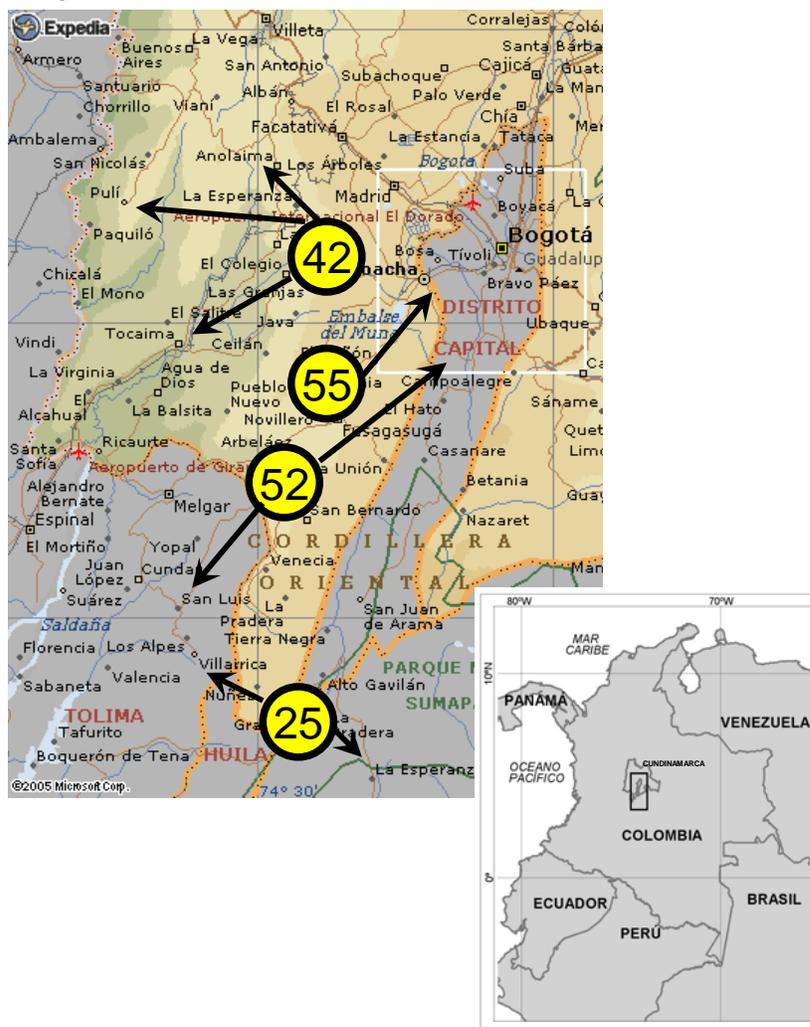


Figura 3: FARC- EP: Dispositivo de frentes al suroccidente de Bogotá a partir de la segunda mitad de la década de los años 90

Fuente: Vásquez, T. 2002 "Análisis del conflicto armado en Cundinamarca y Bogotá 1995 – 2001", Bogotá: CINEP – Mesa de Planificación Regional Bogotá- Cundinamarca.

Hacia finales de 1998 se establece la zona desmilitarizada del Caguán, que incluye cuatro municipios del sur del Meta y un municipio del norte del Caquetá. A partir de entonces el suroccidente de Cundinamarca se convierte en un corredor para el traslado de víctimas de secuestros perpetrados en Bogotá y el occidente del Departamento hacia el Caguán. Como sucedió en el resto del país, los secuestros en suroccidente de Cundinamarca prácticamente se duplicaron entre 1998 y 2000: de 27 secuestros registrados en 1998 se pasó a 61 en 2000, siendo los municipios más afectados Fusagasugá y Silvana.

En el año 2000 el Ejército incursionó en el páramo de Sumapaz en desarrollo de la Operación Aniquilador II con el fin para recobrar control sobre el corredor hacia el Caguán. Con el fin de desconcentrar las acciones militares realizadas por el Ejército Nacional en el marco de esa operación las estructuras de la FARC emprendieron ataque contra patrullas de policía y convoys militares en el occidente de Cundinamarca, al igual que una intensa campaña de “pesca milagrosa” sobre las principales vías de acceso a Bogotá. Además adelantaron acciones terroristas por medio de carro-bombas en Girardot, a fin de intimidar a las autoridades municipales a subordinar el control del presupuesto municipal a la influencia de los mandos locales de las estructuras de la FARC en ésta área del Departamento.

Al igual que sucedió en el oriente de Cundinamarca, las operaciones de contención del *Plan Candando* adelantadas por el Ejército Nacional a partir de 2001 en áreas conectadas por corredores de movilidad con la zona desmilitarizada del Caguán, lograron reducir tanto las acciones terroristas como el secuestro en el suroccidente de Cundinamarca y más aún, en la ciudad de Bogotá. La respuesta de las estructuras de la FARC en ésta área del Departamento fue una campaña de atentados contra torres de conducción de energía eléctrica en los municipios de Silvana, Viotá y Quétame, al igual que la realización de retenes ilegales en las vías principales y la amenaza contra funcionarios de las administraciones locales, que eran intimidados para que renunciaran para paralizar la actividad pública en los municipios, sucedió en Fusagasugá, Pasca, Granada, Sibaté y Soacha, entre otros.

También de manera similar como ocurrió en el oriente de Cundinamarca, la retoma de la iniciativa por parte del Ejército Nacional en el suroccidente del Departamento a partir de 2002, obligó al repliegue de las estructuras de la FARC. Éstas sin embargo también emprendieron un acelerado incremento en acciones de desgaste para comprometer a la Fuerza Pública mediante enfrentamientos y combates en los municipios cercanos a Bogotá a, entre ellos, Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá, al igual que en aquellos municipios donde se había concentrado la compra de tierras de alta valorización como San Antonio de Tequendama, Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte y Girardot, entre otros.

Los resultados exitosos de las operaciones militares que lograron el repliegue de las estructuras de la FARC en Cundinamarca luego de 2003 contribuyeron a reducir visiblemente los picos de acciones de terrorismo y secuestro que se registraron tanto en Cundinamarca como Bogotá a partir 2002, luego de la ruptura de los diálogos de negociación entre la administración Pastrana y la FARC en la zona desmilitarizada del Caguán

2.3 Occidente y noroccidente de Cundinamarca⁷

En el desarrollo de la misma dinámica de apropiación de tierras rurales de alta valorización en cercanía de Bogotá descrita anteriormente, los municipios pertenecientes al occidente del Departamento como Tocaima, Guayabal de Siquima, Viani, La Peña, Cachipay, La Mesa, Anapoima; Jerusalén, Pulí y San Juan de Río seco, también fueron duramente golpeados por los grupos armados al margen de la ley durante la segunda mitad de la década de los 90. (Ver Figura 4)

En cuanto tiene que ver con la actividad insurgente en el país, el área del noroccidente de Cundinamarca fue la más dinámica durante el período. Allí se estableció y consolidó el frente 22 de la FARC, una de las estructuras más activas en materia de extorsión y secuestro, que luego fue completamente desmantelada por la operación *Libertad I* adelantada por Ejército Nacional a partir de 2003.

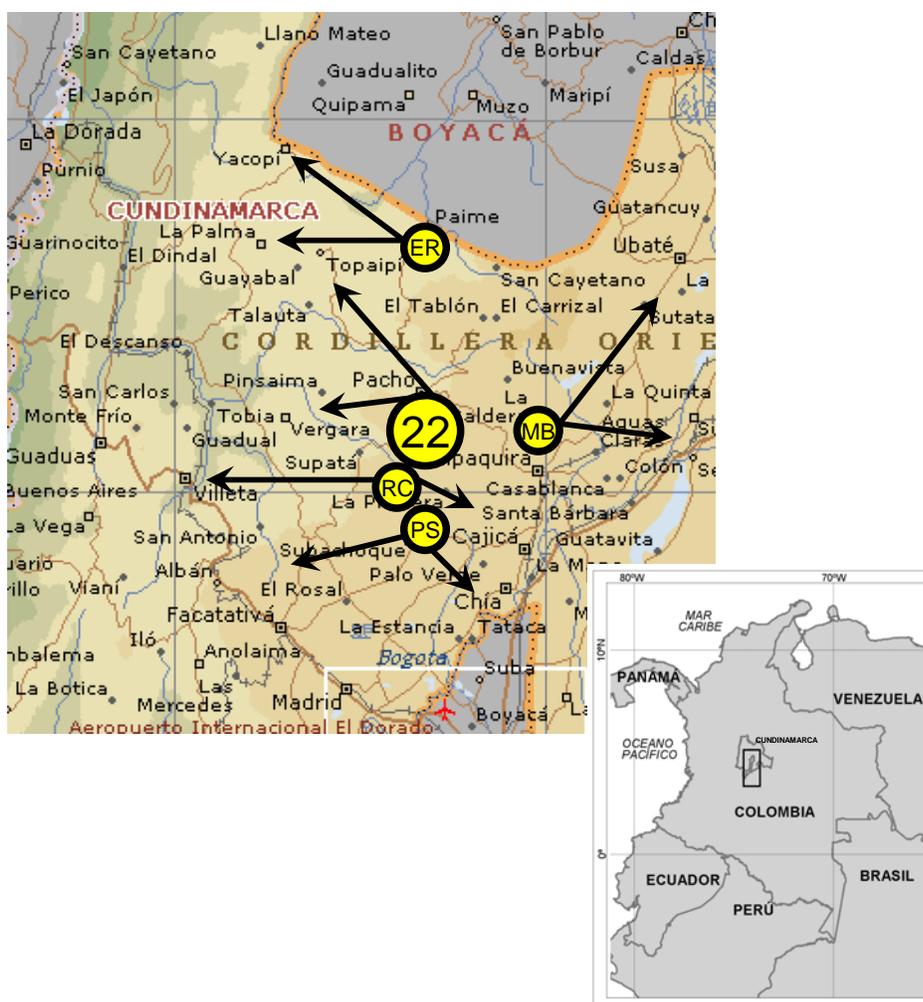


Figura 4: FARC- EP: Dispositivo de frentes al noroccidente de Bogotá a partir de la segunda mitad de la década de los años 90

Fuente: Vásquez, T. 2002 "Análisis del conflicto armado en Cundinamarca y Bogotá 1995 – 2001", Bogotá: CINEP – Mesa de Planificación Regional Bogotá- Cundinamarca.

⁷ Basado en Vásquez, *Op.cit.*

Desde 1995 a 2000 la actividad insurgente en esta parte del Departamento creció en intensidad, entre otras razones, por el importante flujo de recursos que representaba para estas estructuras el secuestro. Algunos estimativos señalan que durante estos años el frente 22 percibía anualmente por medio de esta práctica cerca de COL\$ 2 mil millones (entre US\$ 1-2 millones anuales durante el período). Al igual que en el resto de Cundinamarca, las acciones insurgentes incluyeron ataques a cuarteles de Policía en los municipios

Al igual como ocurrió en el oriente y suroccidente del Departamento, la secuencia de acciones emprendidas por las estructuras insurgentes localizadas en esta área de Cundinamarca, involucraron en una primera etapa ataques contra estaciones de Policía en municipios como la Palma, Guayabal de Siquima y Puli entre 1996 y 1997. En este último año además, fue emboscada una comisión conjunta judicial y policial en Villeta cuando investigaban en robo de combustibles en la región. En julio de 1998 el frente 22 se tomó la cabecera municipal de Yacopí.

Hacia el año 2000 se inicia la etapa de amedrentamiento de funcionarios de las administraciones municipales: en marzo de ese año el frente 22 secuestra a 9 personas en un retén ilegal en la vía a Guateque, entre quienes se encuentra el alcalde de Ubaté. En abril de ese mismo año se atribuyen a estructuras de la FARC la activación de carro-bombas en Cachipay y Anapoima a fin de intimidar a las autoridades municipales a entregar el control del presupuesto municipal a la guerrilla.

A diferencia de los que ocurrió en el oriente y suroccidente de Cundinamarca entre 2001 y 2002, las estructuras de las FARC en el noroccidente del Departamento no se vieron comprometidas en las operaciones de contención que adelantó el Ejército en las áreas contiguas a la zona desmilitarizada del Caguán durante estos años. Por lo tanto las actividades de secuestro y extorsión realizadas por la insurgencia en esta área continuaron en un nivel similar a las que traían desde la década de los años 90, y fueron acompañadas por una intensa campaña de atentados contra torres de conducción de energía y comunicaciones, voladura de puentes, hurto e incineración de vehículos, ataques a estaciones de Policía y amenazas contra autoridades locales en municipios de San Juan de Rioseco, Chaguaní, GuaduasVillera, Nimaima, La Peña, La Palma y Topaipí. Esta campaña se intensificó a partir de la terminación de la zona desmilitarizada del Caguán, en febrero de 2002.

Por consiguiente, no fue de extrañar que cuando el Ejército Nacional logró retomar la iniciativa militar en Cundinamarca luego de las exitosas campañas en el oriente y suroccidente, el objetivo prioritario de la operación *Libertad I* fuese el desmantelamiento de las estructuras insurgentes del noroccidente. Al igual que sucedió en otras áreas del Departamento, la reacción de las estructuras de la FARC ante esta operación fue emprender una serie de acciones para desgastar a la Fuerza Pública que condujo al registro de un alto número de combates en municipios aledaños a Bogotá, entre ellos, Chía, Cota, Cajicá, Tenjo, Subachoque, El Rosal y Supatá, entre otros. Sin embargo, estas acciones no lograron desviar la acción del Ejército Nacional que luego de cerca de 200 enfrentamientos en municipios del noroccidente del Departamento como La Palma, Yacopí, El Peñon y Topaipí, logró empujar a los guerrilleros hacia lo alto de las montañas y los cercaron. Como resultado de esta operación, hacia finales de 2003 habían sido dados de baja a el cabeza del Comando Conjunto Occidental y del

frente 22 de la FARC, Carlos A. Osorio Velásquez, alias “Marco Aurelio Buendía” al igual que su segundo “Javier Gutiérrez”, al cabeza de la compañía móvil Manuela Beltrán, alias “Manguera”, al jefe de la compañía Reynaldo Cuellar, alias “Rumba”, y a los segundos cabecillas del frente 22, de las compañías Esteban Ramírez y Ché Guevara. En total, durante la operación *Libertad I*, se dieron de baja a 225 guerrilleros y se capturaron 260 más. Cerca de otros 80 desertaron. Las estructuras insurgentes ubicadas en esta parte de Cundinamarca fueron sin duda las más duramente golpeadas por el Ejército, habiéndose desmantelado sus mandos antes de que pudieran emprender un repliegue ordenado.⁸

2.4 La zona urbana del Distrito Capital.⁹

A partir de la segunda mitad de la década de los 90 se desató en el país una disputa entre insurgencia y paramilitares en áreas rurales por el control de bases sociales que eran forzadas a ofrecer apoyo a unidades de estas agrupaciones irregulares. En el centro del país se registraron campañas intensas de masacres y asesinatos selectivos tanto de dirigentes políticos como de pobladores rurales adelantadas por los grupos armados ilegales en Cundinamarca, el sur del Meta, Tolima, Caquetá y Casanare, las cuales generaron flujos importantes de desplazamientos forzosos hacia Bogotá.

En muchas oportunidades, estos desplazados llegaron a asentarse en parcelaciones de tierras no aptas para la urbanización, en zonas periféricas de la ciudad en alto riesgo de ser afectados por procesos de remoción en masa e inundaciones como es el caso de una muchos asentamientos de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy al igual que de la Comuna de 4 –que incluye los sectores de Altos de Cazuca y Ciudadela Sucre que ya presentan continuidad física con la malla urbana del sur de Bogotá– en la cabecera municipal de Soacha.¹⁰

Simultáneamente con estos desplazamientos forzados, durante la segunda mitad de los años 90 la ciudad de Bogotá presenció una escalada de actividades realizadas por células de milicianos urbanos, entre ellas, ataques a Estaciones de Policía y Centros de Atención Inmediata –CAIs– en distintos sectores de la ciudad, principalmente en Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme, atribuidos a la Red Urbana Antonio Nariño –RUAN–.¹¹ A partir de 1998 se arrecian los ataques con artefactos explosivos contra

⁸ Ver León, J. 2004. “El cerco de Bogotá”. *El malpensante*. No. 58. Sept. 16 – Oct. 31.

⁹ Basado en Vásquez, *Op.cit.*

¹⁰ Según la Unidad de Atención Integral al Desplazado –UAID– del Distrito Capital, con base en datos correspondientes al período mayo 1999 y agosto de 2002, se atendieron en Bogotá por el orden de 8.500 familias víctimas de desplazamiento forzado, equivalentes a 35.000 personas. Según los datos manejados por esa fuente, más del 55% de esas familias se ubicaron inicialmente en las localidades de Ciudad Bolívar (26%), Kennedy (12%); Bosa (10%) y Usme (8%). Ver ACNUR. 2003. *La población desplazada en Bogotá. Una responsabilidad de todos*. Bogotá: Proyecto Bogotá cómo vamos, citado por Pérez, M. 2004. *Territorio y desplazamiento. El caso de Altos de Cazucá, Municipio de Soacha*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, p. 26-29. De otra parte, vale la pena destacar que el censo experimental de Soacha realizado por el DANE en mayo de 2003, estableció la existencia de 17.531 personas inmigradas al municipio por desplazamiento, de los cuales 7.718, ó el 43%, estaban asentadas en la Comuna 4. Precisamente a raíz de la presencia de la pregunta acerca de la situación de desplazamiento forzado en el formulario del censo (Casilla 49: ¿Alguna vez tuvo que abandonar el lugar donde vivía por causa del Conflicto Armado Interno? ¿Cuándo? ¿De dónde salió?), algunos líderes comunitarios de la Comuna 4 manifiestan que hubo un subregistro de personas en esa situación, por temor a que esta información diera lugar a persecuciones en su contra, como las que efectivamente tuvieron lugar a partir de Octubre de 2003 según informes de la Defensoría del pueblo Regional Cundinamarca.

¹¹ La función principal de las milicias urbanas es proporcionar apoyo logístico a los frentes rurales, y desarrollar actividades de inteligencia económica y militar al igual que proselitismo político armado. Algunas fuentes citan estimativos según los cuales entre el período de 1990-94 y el de 1995-99, las milicias urbanas de la FARC pasaron e

sedes bancarias, instituciones estatales y centros comerciales en zonas del centro de la ciudad y sectores residenciales atribuidos a milicias urbanas y partir de 1999 se producen ataques con morteros contra la Escuela de Artillería en Usme y Escuela de Cadetes en Suba.

Además de estas acciones, las autoridades estiman que las milicias desarrollaban actividades legales “de fachada” para conseguir recursos en diversos lugares de la periferia bogotana. Así se registran informes de que integrantes de milicias en ese entonces administraban panaderías, tiendas, tabernas y hospedajes y con frecuencia conducían buses urbanos. Mantenían un bajo perfil y ejercían control sobre personas extrañas en el sector. También se menciona la vinculación de las milicias con la fabricación de “changones” (escopetas recortadas de factura artesanal) y no se descarta que hayan armado integrantes de bandas y pandillas locales con el objeto de percibir un porcentaje de la vía de extorsiones y atracos realizados por ellos.¹²

Un lugar estratégico de la ciudad que estuvo bajo la influencia de las Milicias Bolivarianas y estructuras de las FARC en ese entonces fue el sector de Corabastos, la principal central mayorista de alimentos de Bogotá. Por tratarse de una centralidad adonde entran y salen camiones de distintos puntos de todo el país, el control de este sector resultaba de especial importancia para apoyar los frentes rurales trayendo y enviando armas, material de intendencia, drogas, alimentos y otros artículos. También es lugar estratégico para hacer inteligencia para la extorsión y el secuestro.¹³

Particularmente después de la terminación de la zona desmilitarizada en el Caguán, las acciones terroristas urbanas a cargo de las milicias de la FARC se incrementaron de manera inusitada: durante 2002 se registraron en la ciudad 140 eventos en los cuales fueron utilizados explosivos, ataques con cilindros, granadas y minas antipersonales. Entre estos, se registró el ataque con morteros al palacio presidencial durante la ceremonia inaugural de la administración del presidente Uribe. Luego en febrero de 2003 ocurrió el atentado contra el Club El Nogal en cual murieron 36 personas y fue atribuido a la Columna Teófilo Forero. Sin embargo, con el desmantelamiento y repliegue de las estructuras insurgentes en Cundinamarca luego de 2003, tanto la presencia como la actividad de las milicias urbanas se han visto reducidas, como ha sucedido con los secuestros extorsivos y los atentados terroristas en la ciudad.

A pesar de la gravedad de la situación descrita hasta aquí, es necesario señalar que si bien la intensidad de actividad de las unidades de la FARC en Bogotá y sus alrededores de Bogotá no fue despreciable durante este período, dicha actividad sólo se podría calificar como de orden medio a bajo al compararla con el nivel de actividad realizado por esta agrupación insurgente en otras lugares de la geografía nacional, entre ellos, las zonas petroleras y de cultivos de uso ilícito en Norte de Santander, Arauca, y Putumayo,

200 a 2000 efectivos en la ciudad de Bogotá. Ver: Escuela Superior de Guerra. s.f. “Fundamentos de la estrategia de defensa y seguridad nacional”. Las autoridades asocian el desarrollo de estas células de milicianos con la presencia de ex guerrilleros que se habían acogido a procesos anteriores de desmovilización, algunos de los cuales se asentaron en urbanizaciones promovidas por grupos de izquierda, entre ellas, Nuevo Chile en la localidad de Bosa, y Julio Rincón y Villa Mercedes en el sector de Altos de Cazuca en Soacha.

¹² Ver Escobedo, *Op. cit.*

¹³ Escobedo, *Op. cit.*

al igual que los corredores viales hacia los puertos de Buenaventura, Urabá, Coveñas Santa Marta y Barrancabermeja.

Como lo señalan algunos analistas, el intento de urbanización del conflicto armado por parte de los grupos insurgentes durante la segunda mitad del los noventa y los primeros años del nuevo siglo tuvo un alcance limitado, por cuanto no hay indicios de que la guerrilla haya logrado consolidar ni de la capacidad de realizar en forma sostenida acciones ofensivas en ciudades como Bogotá, ni la base organizacional y de recursos requeridos para controlarla militarmente.¹⁴

3. *Las operaciones de la Fuerza Pública en Bogotá y sus alrededores.*

A mediados de la década de los 90 el dispositivo militar de la Fuerza Pública destinaba una parte significativa de la fuerza militar a la defensa de sus propias pequeñas y dispersas guarniciones militares y de policía, así como a la protección de infraestructura vial, redes de comunicaciones, instalaciones petroleras y energéticas, y aeropuertos.¹⁵ Con base en este dispositivo, en la práctica las iniciativas contrainsurgentes de la Fuerza Pública se reducían a operaciones descentralizadas de patrullaje. Este dispositivo defensivo demostró ser en extremo vulnerable a la doctrina de guerra móvil que desarrolló la FARC a partir de 1996, la cual le permitió a este grupo insurgente concentrar contingentes de fuerza superior para golpear bases militares (como en el caso de Las Delicias y Patascoy), bases antinarcóticos (como en el caso de Miraflores) y unidades en patrulla (como en el caso del Batallón Contraguerrilla 52 en El Billar), asestando importantes derrotas militares a la Fuerza Pública.

El momento a partir del cual comenzó a revertirse esta cadena de fracasos militares frecuentemente se asocia con la respuesta coordinada que dieron las Fuerzas Militares a la toma de Mitú por parte de la FARC, en noviembre de 1998. Sin embargo en Cundinamarca las Fuerzas Militares obtuvieron éxitos importantes desde 1997, cuando el Ejército incursionó en los municipios del oriente con unidades de mayor movilidad y capacidad de reacción, un mejor el acopio y uso de inteligencia y una mayor capacidad para atacar a la guerrilla desde el aire. Con ello lograron neutralizar las acciones de sabotaje y los retenes sobre la vía Bogotá - Villavicencio y restablecer la seguridad necesaria para garantizar la culminación de la construcción de la nueva carretera¹⁶.

¹⁴ Al respecto los analistas señalan que la mayor capacidad militar de la insurgencia continúa localizada y se manifiesta con mayor intensidad en las zonas donde se establecieron originalmente los incipientes núcleos guerrilleros en los años sesenta y setenta. Ver C. Echandía, 2003. "Estado del conflicto armado y perspectivas de Paz" en Pérez, B. (Coor.) *El laberinto colombiano... Op. cit.*

¹⁵ Aún después de la reestructuración de las Fuerzas Militares que tuvo lugar en los últimos años de la década de los 90, el dispositivo militar afectaba de manera visible su capacidad operacional para responder a la actividad insurgente. Según un informe preparado por la Corporación Rand para la Fuerza Aérea de EE.UU., la situación del dispositivo militar en abril de 2000 era la siguiente: "...cerca de la tercera parte de 144.000 hombres de la fuerza militar colombiana, se encuentra en entrenamiento o defendiendo instalaciones fijas. Otro 13% está defendiendo 842 puntos críticos de infraestructura, como puentes, caminos, redes de comunicación, aeropuertos e instalaciones eléctricas y petroleras. Un 5% está desplegado en puestos de guardia fronteriza. Esto deja algo menos de la mitad de la fuerza activa disponible para operaciones. Ver Rabasa A. y Chalk, P. 2003 "El laberinto colombiano. Las sinergias entre drogas e insurgencia y sus implicaciones para la estabilidad regional" en Pérez, B. (Coor.) *El laberinto colombiano. Propuestas para la resolución del conflicto.* Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p. 311.

¹⁶ Hay que recordar que en septiembre de 1996 ingenieros constructores de esta vía fueron víctimas de secuestro extorsivo por parte de la FARC. Ante esta situación y el posterior sabotaje contra la planta de asfaltos en Guayabetal, firma constructora de la vía Bogotá-Villavicencio había anunciado en abril de 1997 su intención de realizar la terminación verbal del contrato debido a la presión extorsiva realizada por las FARC. Ver Vásquez, *Op.cit.*

El aumento de la capacidad militar de ofensiva que permitió la readecuación del dispositivo de las Fuerzas Militares con el desarrollo de la Fuerza de Despliegue Rápido –FUDRA– y las mejoras en el acopio de información a través de la modernización de equipos y entrenamiento para realizar inteligencia de señales (SIGINT), permitió que a mediados del años 2000 se pudiera contener exitosamente varios ataques masivos y simultáneos de la FARC desde la zona desmilitarizada del Caguán hacia Meta, Guaviare, Huila, Caquetá y Putumayo.

Luego finales del mismo año, el Ejército lanzó la operación “Aniquilador II” con el objetivo de recuperar el control de los corredores que operaba la FARC en el páramo de Sumapaz hacia la zona del Caguán, por donde entraba una parte importante de los explosivos utilizados en acciones terroristas y transitaba el flujo de secuestrados originados en Bogotá y el suroccidente de Cundinamarca. En 25 días de operaciones, las tropas retomaron control de lugares como el Alto de las Sopas, La Concepción, el Plan de Sumapaz, las vegas de la Playa y de la Unión, entre otros. Esta operación fue la piedra angular sobre la cual comenzó a operar desde entonces el dispositivo de seguridad de Bogotá conocido como el *Plan Candado*.

Sin embargo, la fuerza especializada en combate de alta movilidad conocida como FUDRA con las cuales se adelantaban estas operaciones, tenía una enorme debilidad para consolidar el control de los territorios que lograba arrebatar a la guerrilla. Como lo relata la periodista Juanita León:

...en el primer trimestre de 2003 estuvieron mes y medio en los Montes de María, en el sur de Bolívar. Luego se trasladaron a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde permanecieron otro mes. Apenas lograron empujar a la guerrilla hacia la cima de la serranía, se fueron al Catatumbo, en el nororiente del país, donde el ejército necesitaba refuerzos para atacar al Eln. Finalmente llegaron a Cundinamarca a apoyar la labor de los soldados de la Brigada 13, de la V División y de los soldados campesinos.¹⁷

Libertad I fue una de las primeras operaciones en las cuales se comprometió la presencia del FUDRA durante 6 meses continuos al igual que el apoyo de “soldados campesinos” oriundos de la región. Integrados en 59 pelotones, la misión de estos últimos era recoger datos de los vecinos acerca de la ubicación de los guerrilleros y patrullar las vías para impedir la entrada de víveres para la FARC¹⁸. El esfuerzo principal de combate lo asumió la FUDRA, dividida en escuadras de nueve y diez hombres con las cuales se hizo el "registro, cerco, anillo y aniquilamiento", doctrina con la cual hacía el final del año 2003 lograron dar de baja a los principales cabecillas de las estructuras insurgentes en el occidente de Cundinamarca y comprometer su operatividad militar, logística y financiera.

De esta forma el Ejército retomó por completo la iniciativa militar en Cundinamarca a partir de 2003. La FARC había logrado controlar la iniciativa por algunos años durante mediados de la década de los 90, cuando el dispositivo militar defensivo del Ejército Nacional se lo permitió. Las numerosas operaciones militares que las Fuerzas Militares

¹⁷ Op. cit.

¹⁸ Ibid. Estas labores inteligencia se apoyaron además en la red de informantes creada por administración Uribe. La Brigada Móvil 3, con sede en La Palma, ofreció recompensas de 70 millones por pistas que condujeran directamente a Buendía y de 40 millones por los otros jefes de la zona. Sólo en el occidente de Cundinamarca el ejército repartió 200 millones de pesos en recompensas.

emprendieron en Cundinamarca a partir de 1997 lograron contener algunas de las acciones más dañinas causadas por la insurgencia, pero no lograron erradicar su presencia, la cual se restablecía brevemente después del retiro de las tropas regulares. Sólo después de febrero de 2002, cuando se termina la zona desmilitarizada y el gobierno emprende una ofensiva contra la FARC, es cuando las Fuerzas Militares imponen un compás que obliga a la insurgencia a defenderse replegándose estratégicamente. A partir de entonces las estructuras de la FARC se centran en intentar desacelerar el ritmo impuesto por el Ejército, mediante acciones que pretende desgastar a la Fuerza Pública para prolongar la confrontación y debilitar las ofensivas.¹⁹

4. La llegada paramilitar al centro del país.

La puesta en marcha de programas para inculcar respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario entre miembros de las fuerzas militares y la policía desde finales de la década de los 90, tenía entre sus propósitos mejorar las relaciones de la Fuerza Pública y la población civil en zonas de operación y además neutralizar la familiaridad de los insurgentes con el terreno y a sus redes de control social en estas áreas. Ya se ha analizado en detalle cómo el continuo asedio por parte de unidades insurgentes en distintos lugares del país con el propósito explícito de dispersar la presión de la Fuerza Pública sobre determinados puntos, llevó a que el dispositivo alta movilidad del Ejército tuviera que abandonar los escenarios recuperados antes de consolidar su control.

La aparición de grupos paramilitares en el centro del país a partir de 1996 y 1997 sugiere alguna medida de coordinación –la cual pudo haber sido espontánea o no– con las operaciones militares contrainsurgentes más importantes realizadas por parte de la Fuerza Pública cuando aún no disponía de la capacidad de consolidar el control de áreas de donde era expulsada la insurgencia. Así, se registra la aparición de un grupo de 70 paramilitares en el oriente cundinamarqués a partir del primer trimestre 1997, cuando el Ejército lanzó la importante operación contra los frentes que controlaban el área desde la cual asediaban la vía Bogotá-Villavicencio. Posteriormente, durante el último trimestre de ese año, aparecen reportes de un campamento paramilitar en el municipio de San Martín, en el zona del Ariarí con cerca de 400 hombres, desde donde realizan operaciones en el sur del Meta, mientras que el Ejército realizaba en los Llanos del Yarí, en el norte del Caquetá, una ofensiva contra los frentes del Bloque Sur de la FARC.

¿Cómo se financiaron las escuadras de paramilitares durante los primeros años de incursión en el centro del país, hasta cuando lograron consolidar una presencia urbana con su respectiva base financiera luego del año 2000? A continuación se hace un breve recuento del proceso seguido por los paramilitares en su entrada a Cundinamarca a fin de hallar algunas pistas para responder a esta pregunta.

4.1 Los paramilitares en Cundinamarca

Los registros de prensa señalan la entrada de grupos paramilitares a Cundinamarca desde Puerto Boyacá por el occidente del Departamento. En 1996 se detectó la

¹⁹ Fundación Democracia y Seguridad. 2004. *Coyuntura de seguridad. El repliegue de las FARC: ¿Derrota o estrategia?* Bogotá: Fundación Democracia y Seguridad.

presencia de un grupo paramilitar en San Juan de Rioseco cuya misión era cerrar los corredores de movilidad que le permitían a las FARC moverse entre las provincias del Bajo Magdalena y Tequendama.

En mayo de ese mismo año también hay informes de la presencia de grupos paramilitares que se autodenominaban “muerte a guerrilleros” y “paramilitares de oriente” que ofrecen seguridad a los ganaderos y dueños de fincas de recreación azotados por la extorsión y secuestro, y que amenazan a los alcaldes de municipios como Cabrera y Venecia, sindicándolos de ser auxiliares de la guerrilla.²⁰

En enero de 1997 en el municipio de Paratebueno en el piedemonte de los Llanos Orientales, se registra la ejecución de tres campesinos en jurisdicción de las inspecciones de policía Maya y Villa Pacelli, durante un recorrido por varias veredas por parte de paramilitares provenientes de Urabá. El terror cundió por toda la región y provocó el desplazamiento forzado hacia la cabecera municipal²¹. Durante el resto de 1997 hay registros de la presencia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU– en los municipios del oriente de Cundinamarca, anunciando su propósito de combatir a las FARC, intimidando a la población rural y realizando asesinatos selectivos. El terror causado por estas acciones generó desplazamientos masivos en este sector de Cundinamarca.²²

En 1997 jóvenes acusados de ser integrantes de las FARC son asesinados en San Juan de Rioseco, y unos meses más tarde en el piedemonte occidental del departamento, paramilitares vestidos con prendas militares, portando armas de largo alcance y en número aproximado de 70 efectivos, ejecutaron en el caserío de La Horqueta en Tocaima a catorce campesinos. El caserío era reconocido como sector donde se mantenían varios secuestrados y donde la guerrilla se abastecía de víveres. Los paramilitares fueron guiados por dos encapuchados y en hechos confusos, uno de los integrantes del grupo fue muerto y posteriormente identificado como miembro de la Cooperativa de Seguridad Convivir de San Juan de Urabá²³. El terror ocasionado por estos hechos ocasionó desplazamientos masivos de la población rural hacia cabeceras urbanas, principalmente hacia Viotá.

A partir de entonces la presencia paramilitar se consolidó tanto en el oriente cundinamarqués como en los municipios del suroccidente de Cundinamarca pertenecientes a la provincia de Sumapaz. Al oriente del Departamento continuaron registrándose torturas y asesinatos atroces de pobladores acusados de ser auxiliares de la guerrilla. Hacia mayo de 1998 en Paratebueno se registra la actividad de un grupo de 200 hombres portando brazaletes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y de las Autodefensas de los Llanos, estas últimas ligadas con el reconocido esmeraldero y narcotraficante Víctor Carranza²⁴. Estos hechos coinciden con la compra de tierras por parte de narcotraficantes y la circulación de “listas negras” seguidas por masacres de campesinos y asesinatos “ejemplarizantes” en 1998.

²⁰ Ver Vásquez, *Op.cit*

²¹ CINEP. 2004. *Paramilitarismo de Estado en Colombia. 1988-2003*. Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular, p. 183.

²² Vásquez, *Op. cit.*

²³ *Ibid.*, pg. 218.

²⁴ *El Tiempo*, Mayo 7, 1998, p. 3ª, citado por Vásquez, *Op.cit.*

En la provincia del Sumapaz y el piedemonte occidental de Cundinamarca la presencia paramilitar también se registra por medio de asesinatos selectivos y amenazas contra alcaldes y dirigentes cívicos, cuyos nombres se relacionan en “listas negras” de personas que son acusadas de ser colaboradores de la guerrilla y por tanto se declaran como “objetivos militares”²⁵.

Alrededor de 1998 también tiene lugar la reactivación de paramilitares en el noroccidente de Cundinamarca en las provincias de Rionegro y Gualivá, en la región durante los años 80 habían operado grupos de justicia privada bajo órdenes del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Particularmente se registra la actividad de unidades paramilitares establecidas aquí, en relación con el hurto de combustibles del poliducto que abastece a Bogotá. En octubre de 1998 en el sitio conocido como San Bernardo, en la vía que de Puerto Salgar conduce a Medellín, dos miembros de una comisión investigadora de la Dirección de Policía Judicial –DIJIN– que desarrollaban una operación encubierta relacionadas con el hurto de combustibles fueron encontrados muertos con señales de tortura.²⁶ En estos años además, se verifica la expansión paramilitar hacia la zona esmeraldífera de Gachalá y Valle de Tenza donde además se concluía la construcción de la represa del Guavio.

La ola de asesinatos en contra de dirigentes políticos en municipios de las provincias de Rionegro, Gualiva, Medina, Tequendama y Sabana Centro, que se inició en 1997 continuó hasta alcanzar su máximo nivel en el año 2002, particularmente en aquellas áreas donde las organizaciones al margen de la ley muestran empeño en disputar y consolidar su influencia local, como fueron el corredor del poliducto que abastece de combustibles a Bogotá en el noroccidente del Cundinamarca, el corredor de movilidad entre el Sumapaz y Bogotá al Suroriente de Bogotá y la zona del piedemonte llanero el oriente de Cundinamarca.

Por consiguiente es probable que la financiación para el mantenimiento de las escuadras que incursionaron en los corredores estratégicos alrededor de Bogotá a finales de los años 90 se haya solventado con recursos locales: en los municipios de occidente por medio de vacunas a los propietarios de las fincas de recreo, al igual que mediante el robo de combustible del poliducto que abastece a Bogotá proveniente de Puerto Salgar. En cuanto a la escuadra paramilitar que mantuvo presencia en los municipios de Medina y Paratebuena, luego de la operación realizada por el Ejército contra los frentes 53 y 54 que operaban en la zona, es probable que haya sido financiada con aportes de los nuevos terratenientes de la zona.

4.2 La llegada del Frente Capital a la zona urbana de Bogotá y Soacha

A partir del año 2001 se hizo manifiesta la intención de la AUC de establecerse de manera permanente y ejercer control en diversos centros urbanos del país como Barranbarmaja, Cúcuta, Fusagasugá y Bogotá. Fue precisamente en enero de ese año cuando Carlos Castaño anunció oficialmente la presencia de las AUC en Cundinamarca

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid. Los cuerpos de las víctimas evidenciaron señales de tortura con colillas de cigarrillo, estrangulamiento, desfiguración, laceración, destrozos en la piel, además de múltiples fracturas. Los investigadores fueron maniatados y ejecutados de varios impactos de arma de fuego en la espalda. El director de la DIJIN General Ismael Trujillo Polanco aseguró que “las torturas y la forma como fueron asesinados dejan bien claro quienes fueron los autores: No tengo la menor duda de que fueron los paramilitares. Esa es su forma de actuar y esa es su zona de operaciones”.

y Bogotá. El Frente Capital de las AUC se conformó con el fin de frenarle el abastecimiento a la guerrilla de material de intendencia, de campaña y de guerra que sale de Bogotá, especialmente en Ciudad Bolívar, Kenendy, Usme. En el anuncio también señaló que el Frente Capital operaría en los cascos urbanos de los municipios de Soacha, Facatativa, Sasaima, Tunja y La Calera²⁷.

Hasta entonces las acciones de paramilitares en Bogotá habían sido puntuales: las primeras incursiones paramilitares se reportan en urbanizaciones con proyectos de vivienda popular organizadas por dirigentes de izquierda como Nuevo Chile en Bosa desde 1995. Luego a principios de 1997 se registran acciones paramilitares en la cabecera urbana de Soacha, en la zona de Altos de Cazuca, localizada en límites con Ciudad Bolívar. En febrero, una incursión paramilitar en el barrio Villa Mercedes de ese municipio termina con la ejecución de un poblador, luego de torturar y quemarlo. En junio de ese mismo año, se atribuye a paramilitares la muerte de seis personas y seis heridos en una incursión contra una fiesta en una cancha de tejo en el sector de Altos de Cazuca²⁸.

Durante 1997 hay numerosas asesinatos de integrantes de la Unión Patriótica –UP– en Bogotá atribuidas a los paramilitares, entre ellos, un dirigente sindical cofundador del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta y un agente de policía que prestaba vigilancia en la sede de la UP cuando paramilitares intentaban colocar una bomba de frente a la sede de ese movimiento. También tiene lugar el asesinato de dos investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP– a manos de paramilitares, aparentemente motivado por el trabajo que hacían en el sector de Sumapaz con la Asociación de Reserva Natural del Sumapaz.²⁹

A partir de 1998 se menciona insistentemente la operación de un corredor de movilidad por medio de milicias insurgentes sobre el eje Sumapaz- Usme- Soacha - Ciudad Bolívar (ver figura 5). Desde entonces se reporta la presencia cada vez más permanente de grupos paramilitares en estas localidades, a la vez que se perpetran asesinatos selectivos de defensores de derechos humanos reconocidos como el abogado Eduardo Umaña Mendoza y María Arango Fonnegra³⁰. En 1999 se tiene noticia de la presencia de encapuchados bajo el rotulo de las AUC en los barrios aledaños a Corabastos, la central mayorista de alimentos de Bogotá en Kennedy, donde ejecutan al presidente encargado de la Junta de Acción Comunal del barrio La Rivera, luego de circular volantes con amenazas.³¹

La declaración pública del establecimiento permanente del Frente Capital en Bogotá en Enero de 2001 coincide además con la consolidación de las operaciones de contención que adelantaban las Fuerzas Militares en torno a la zona desmilitarizada del Cagúan, cuya operación más exitosa *Aniquilador II* había recién culminado durante los últimos meses de 2000, restaurando el control del Ejército Nacional sobre el corredor de movilidad que habían operado las milicias de la FARC entre Bogotá y el Sumapaz.³²

²⁷ *El Tiempo*, Enero 19, 2001, pp. 1 y 5A, citado por Vásquez, *Op.cit.*

²⁸ *Ibid.*; CINEP, *Op. cit.*, p. 200.

²⁹ *Ibid.*, p.194

³⁰ CINEP, *Op. cit.*

³¹ *Ibid.*

³² En relación con la coordinación de operaciones entre las AUC y la Fuerza Pública, alias “Rodrigo” comandante del Bloque Metro declaró en entrevista que desde el año 2000 se abolió cualquier tipo de coordinación militar con el

Con ocasión de la declaración de la creación del Frente Capital, Castaño dijo a los periodistas del diario El Tiempo:

“Ellos (la guerrilla) parten de la capital, van a Neiva y de ahí, por un corredor estratégico llegan a San Vicente del Caguán. Igual salen de Bogotá, llegan a Cáqueza, se tiran por Choachí y tienen todo el Sumapaz para enviar armas, uniformes y comida”³³.

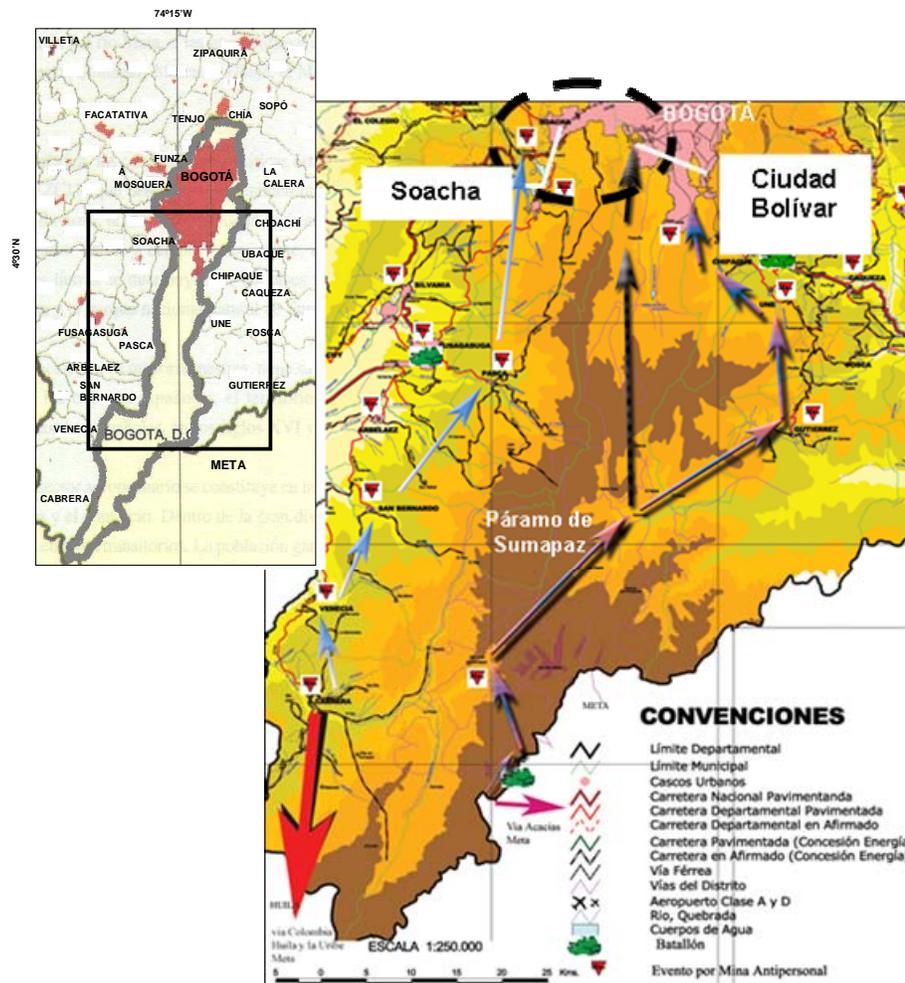


Figura 5: Corredor de movilidad de entrada a Bogotá por el eje Sumapaz –Usme – Soacha - Ciudad Bolívar

Fuente: Fuente: Comando Conjunto Fuerzas Militares, citado por A. Álvarez y A. Barrero. 2002. “Geopolítica del sembrado de Minas Antipersonales en Colombia”. Monografía de grado, FIGRI, Universidad Externabdo de Colombia.

Estado. “El año pasado, contrariando nuestras directivas, uno de nuestros comandantes coordinó algunas operaciones con un oficial en Segovia. Los resultados no se hicieron esperar: 24 muertos y cantidad de heridos. Nosotros hace mucho que nos desparamilitarizamos”, aseguró. Ver *El Tiempo*. “Bloque Metro dice que no cederá a amenazas de los propios paramilitares”. Mayo 27, 2003.

³³ Ver: Se autodenominan Frente Capital. “Los paras llegaron a la ciudad”. *El Tiempo*, 21 de Enero de 2001. Pág. 1-12.

Según Castaño, el Frente Capital se conformó con hombres que aportaron los frentes paramilitares que operaban en la región del Sumapaz (Frente Campesino por el Sumapaz y Bloque Centauros del Llano de las AUC), las Autodefensas del Tolima y Quindío y las Autodefensas de la zona esmeraldífera de Cundinamarca y Boyacá (Autodefensas de Cundinamarca de las AUC). Al inicio de sus operaciones, los voceros del Frente Capital aseguraron que actuaban bajo la dirección del Estado Mayor Central de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

La presencia del Frente Capital en Bogotá así como en otras ciudades del país, coincide con una etapa de expansión vertiginosa en el pie de fuerza de las “autodefensas ilegales” en todo el país. Según estimativos del Ministerio de Defensa entre 1999 y 2001 el número de efectivos vinculados a estos grupos pasó de cerca de 6.000 a 10.500. Es este el momento en el cual se inicia una vertiginosa expansión de cultivos de coca en áreas de influencia paramilitar como es el caso del nordeste antioqueño y el sur de Córdoba, la Sierra Nevada de Sta. Marta, el sur de Santander y el occidente de Boyacá, y el sur del Meta y Vichada.³⁴ Fue además el momento en cual comenzaron los rumores de la “compra de franquicias” de agrupaciones paramilitares por parte de reconocidos narcotraficantes, como sería el caso de Miguel Arroyabe³⁵, quien habría adquirido las unidades militares a cargo de Carlos Castaño –entre ellas, el Frente Capital– por US\$ 7 millones en 2001.

Por lo tanto, no se puede descartar la hipótesis de que el establecimiento del Frente Capital no sólo haya estado dirigido a controlar aquellas zonas donde operaban estructuras y milicias vinculadas a la guerrilla³⁶. También es probable que otro objetivo igualmente importante fuese adquirir control sobre una base urbana fuentes de financiación con flujos estables y considerables, la mayoría de ellos relacionados con negocios ilegales³⁷.

Como sería de suponer, fuentes de este tipo en Bogotá y Soacha ya habían sido desarrolladas y eran controladas por organizaciones delincuenciales locales. Las más consolidadas de estas organizaciones estaban vinculadas con actividades delictivas de envergadura como expendio de estupefacientes asaltos bancarios, la piratería terrestre, “paseos millonarios”, robo de residencias y de vehículos, el sicariato y los secuestros en diversos sectores de la ciudad. Los principales centros de operación u “oficinas del crimen” desde donde las bandas más organizadas planeaban acciones y coordinaban sus redes de contactos especializados como bodegueros, y especialistas en diversas

³⁴ Ver UNODC /Government of Colombia. 2004. *Colombia Coca Survey 2003*. UNODC

³⁵ Migel Arroyabe estuvo detenido por enriquecimiento ilícito durante dos años en la Cárcel Modelo de Bogotá (1999-2001) acusado de enviar cocaína a los Estados Unidos. Tras conseguir su libertad en el 2001 (la justicia precluyó a su favor), en el 2002 fue acusado de dirigir una organización proveedora de sustancias químicas asociadas al narcotráfico, luego de que las autoridades incautaran 135 canecas con sustancias para el procesamiento de droga, al parecer de su propiedad.

³⁶ Según las autoridades, las estructuras milicianas ubicadas en el sur de Bogotá y Soacha no tenían como objeto ejercer un control de área. Eran básicamente enlaces de los frentes rurales, prestando apoyo logístico, financiero y ocasionalmente militar, realizando acciones contra estaciones de Policía y CAIs, al igual que acciones terroristas como atentados dinamiteros contra centros comerciales y bancarios. Contribuían con comisiones que venían a aprovisionarse de armamento y material de intendencia, consiguiéndolo y guardando explosivos. También participaban en la planeación y ejecución de extorsiones y secuestros. En algunos lugares realizaban actividades de adoctrinamiento y reclutamiento de jóvenes, y también practicaban “limpiezas”. Ver Escobedo, R. 2000. “La violencia criminal en Bogotá D.C.” Bogotá: Paz Pública – CEDE / Uniandes.

³⁷ Se estima que el costo de mantenimiento por efectivo en los grupos armados ilegales es superior a COL \$15 millones por año.

modalidades de hurto, sicariato y secuestro, estaban localizadas en las localidades como Rafael Uribe (barrio Quiroga), Tunjuelito (barrios San Vicente y El Carmen), San Cristóbal (barrio La Paz - Juan Rey) y Usme (barrio Yomasa). Las estructuras menos organizadas se dedican a los atracos y los hurtos menores en las zonas cercanas a sus barrios de residencia³⁸.

Dado que en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa al igual que los barrios contiguos a estos sectores pertenecientes al caso urbano de Soacha predominaban problemas de delincuencia juvenil como los atracos, expendio de drogas, disputas por linderos y propiedad de lotes en sectores subnormales, el terreno en estos lugares fue fértil para la proliferación de “sindicatos de seguridad”. El origen de este tipo de “servicio local de seguridad” se asocia con la localidad de Ciudad Bolívar, particularmente en los barrios más altos que limitan con el municipio de Soacha, entre ellos, Perdomo (Alto, El Pino e Ismael), Jerusalén; Potosí; Santa Viviana, Sierra Morena y Vistahermosa, al igual que en Altos de Cazuca en el municipio de Soacha. Se dice que fueron estructuras originalmente organizadas por comerciantes y juntas de acción comunal para hacer frente a la delincuencia, contratando individuos con trayectoria en actividades al margen de la ley para eliminar delincuentes. Aquellos que eran captura *in flagranti* con frecuencia eran muertos a golpes y patadas por integrantes de estos sindicatos, a manera de escarmiento.

Por consiguiente no es de extrañar que los mandos militares del Frente Capital en principio se interesaran por controlar estas organizaciones desde su establecimiento en Bogotá. Es sabido que uno de los mecanismos de inteligencia y control utilizados con frecuencia por parte de FARC son las Juntas de Acción Comunal, por lo cual durante los primeros meses de “penetración”, las víctimas más frecuentes de la acción paramilitar fueron líderes comunitarios vinculados con este tipo de organizaciones.³⁹

Fue así como en principio contactaron y contrataron a jóvenes sicarios con reputación ya establecida en la zona. Un ejemplo paradigmático de los primeros reclutamientos realizados por el Frente Capital a su llegada a los barrios deperiféricos de Bogotá es el caso de alias “Chiquitín”, un muchacho de 26 años, huérfano, padre de tres hijos, que está aprendiendo a leer y escribir en la cárcel de Acacias, Meta, donde paga una condena de 28 años por acogerse al beneficio de sentencia anticipada por 37 homicidios cometidos entre abril y octubre de 2002 de los que la justicia lo encontró responsable. De acuerdo con el testimonio de su novia, cuya denuncia permitió su captura y otros integrantes de la banda a la cual él pertenecía por las autoridades, la banda mensualmente recibía dinero de un “patrón” llamado *Luís* de las Autodefensas Unidas de Colombia. El monto dependía del número de “cabezas que hayan matado”, entre ellos, viciosos, líderes comunales y personas con “ideología de izquierda”. Al mes de haber hecho las denuncias, el cadáver de la joven fue hallado en terrenos de la Hacienda Terreros en la Comuna 5 de la cabecera municipal de Soacha⁴⁰.

³⁸ Ver Escobedo, *Op. cit.*

³⁹ Por ejemplo en Altos de Cazucá, el sector urbano más deprimido del municipio de Soacha que además queda aledaño a la periferia de Ciudad Bolívar en Bogotá, durante 2001 fueron asesinados *Ciro Alberto Rincón*, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Luis Carlos Galán II sector (5 de junio), *Luis Casallas*, presidente de la JAC del barrio Villa Mercedes (17 de Julio) y *José Cogua*, Vice-presidente de la JAC del barrio La Isla (12 de agosto) luego de que denunciaran públicamente la presencia de las AUC en Altos de Cazucá.

⁴⁰ Ver “«Yo no maté a 37 personas, maté a 137»”, *El Tiempo*, Noviembre 7, 2004, p. 1- 4.

Es probable que el reclutamiento de este tipo de sicarios haya correspondido a una primera etapa de “acercamiento” a las comunidades locales, en el cual el propósito fundamental haya sido la expulsión de milicias y redes de apoyo de la FARC en las goteras de la ciudad, al igual que el atemorizamiento general y ablandamiento de la comunidad para introducir localmente el cobro de cuotas extorsivas a cambio de “protección”.

Sin embargo simultáneamente el Frente Capital también comenzó a operar a través de estructuras militares y financieras más estables y sofisticadas como la que manejó hasta el 2004 Luis Enrique Rojas, alias “Gary”. Oriundo de la región de Río Blanco en el sur del departamento del Tolima, según se dice, llegó a Ciudad Bolívar en 1998 desplazado por la FARC luego de hacer un “curso de autodefensa” en Santa Marta. Gary por lo tanto pertenecía ya a la estructura del Frente Capital.

A su llegada al sector de El Paraíso la parte alta de Ciudad Bolívar, conformó con algunos familiares y amigos que trajo del Tolima una operación de extorsión y protección a través de la cual se adueñó del sector mediante la intimidación, el boleteo y el asesinato. Al comienzo ofreció sacar a los bazuqueros, los ladrones y los milicianos de la guerrilla, luego entró en relación con los tenderos, los comerciantes y los transportadores del sector y tejió una poderosa red de cobro de “impuestos”. Se dice que dependiendo del tamaño de su negocio, los comerciantes tenían que pagar entre \$50.000 y \$300.000 mensuales por su seguridad. En su función de jefe de sicarios del Frente Capital a Gary se le atribuye un centenar de homicidios de jóvenes entre los 14 y los 22 años, señalados como “desechables”, “sapos” o “guerrillos”. Además adelantó labores de reclutamiento de jóvenes del sector.

4.3 La consolidación del Frente Capital en Bogotá

En julio del 2001, pocos meses después de que hiciera el anuncio de la llegada del Frente Capital a Bogotá, Castaño sorprendió al país con su renuncia a la jefatura única de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–. La dimisión obedeció, según él, a las constantes vinculaciones de miembros de las AUC con masacres y con violaciones al derecho internacional humanitario, por lo que planteó que cada frente se debía responsabilizar de sus acciones. Meses después, tomó la dirección política de las AUC, mientras que en la militar hubo una dirección colegiada.⁴¹

Simultáneamente con la renuncia de Castaño a la jefatura única de las AUC apareció en Bogotá el Frente República, estructura vinculada a las Autodefensas Campesinas del Casanare ACC lideradas por Héctor Germán Biutrago alias “Martín Llanos.” No hay fuentes de información que permitan documentar los motivos que condujeron a este evento en particular, pero este según lo manifestó en una entrevista el propio Martín Llanos:

“En la primera renuncia de Castaño (en el 2001) nos abrimos... Renunció porque necesitaba desbaratar la estructura de las viejas autodefensas que había montado para dejar entrar a esos ‘amiguitos’. Ahí conformaron las nuevas AUC. Montaron a ‘Don

⁴¹ *El Tiempo*. “Paramilitares llevan dos años de profundas divisiones”. Mayo 26 de 2003

Berna' como Inspector General. Nadie lo aceptó".⁴²

¿Coincidiría el asunto con la presunta negociación entre Castaño y Arroyabe del "Bloque Centauros del Llano"? Como se sabe el principal fortín de Arroyabe desde los años 90 fue el departamento del Meta, donde después del año 2001 se convirtió en el amo y señor de lo que luego se llamó el Bloque Centauros, un frente de guerra que en poco tiempo logró armar seis frentes con influencia en el Guaviare, el sur y el norte del Meta, el Ariari, el sur de Casanare, Cundinamarca y Bogotá. También conviene señalar que mientras a partir de la implantación del Plan Colombia en el sur del país en el año 2000, el área de cultivos de coca se ha disminuido en Putumayo, Caquetá, y Guaviare, mientras se incrementó en Meta y Vichada en las zonas que eran controladas por Arroyabe.

Por consiguiente, es presumible que la demanda de insumos para el procesamiento de coca se haya incrementado para esta parte del país y que muchas de las operaciones de abastecimiento de estos insumos al igual que de exportación de cocaína, se controlen desde Bogotá, particularmente en las zonas industriales de Puente Aranda cerca del Sanandresito de la 38. Además es probable que el transporte requerido para estas operaciones se coordine desde las inmediaciones de Corabastos, la central mayorista de alimentos en Bogotá.

Efectivamente en 2002 se registró una oleada de violencia, primero en la localidad de Kennedy en los barrios de inmediaciones de Corabastos y el sector industrial de Carvajal y luego, en la localidad de Puente Aranda no sólo en los alrededores de Sanandresito del 38, sino también de zonas industriales como la de San Rafael y Puente Aranda. En ese momento las oleadas fueron asociadas con una puja por el control de estos sectores entre la FARC, el Frente República y el Frente Capital. En ese entonces Arroyabe expandía su control sobre las zonas donde hubo mayor incremento de cultivos ilícitos en el sur del Meta y norte del Guaviare, y a la vez competía por insumos y rutas de narcotráfico con estructuras de la FARC que controlaban en el Meta zonas estratégicas para el cultivo y procesamiento de coca en el sector de San Juanito y Calvario y los municipios de Puerto Rico, Vista Hermosa y Puerto Lleras, en los que el Frente 43 de las FARC al mando de "Javier", "Gener" o "Jhon 40". La disputa por el sector de Sanandresito de la 38 en Puente Aranda y la zona industrial de Carvajal al igual que las inmediaciones Corabastos pronto involucró a comerciantes y transportadores de la zona, quienes eran objeto de amenazas de una y otra parte, situación que finalmente se resolvió con establecimiento de las llamadas "oficinas de cobro" a través de las cuales se garantizaba la protección contra las amenazas de la "contraparte", a cambio de un cobro extorsivo.

El arrechamiento del enfrentamiento entre Arroyabe y Martín Llanos tuvo lugar partir de mayo de 2003, a raíz de denuncias públicas realizadas por Martín Llanos en contra de Arroyabe por sus vínculos con el narcotráfico en respuesta a las amenazas de aniquilamiento lanzadas por las AUC en contra de los grupos paramilitares renuentes a integrar la mesa de negociaciones con el gobierno nacional prevista para discutir los términos de una desmovilización. Junto con alias "Rodrigo", comandante del Bloque Metro, Martín Llanos denunció ante los medios de comunicación sus diferencias con las AUC y el Bloque Central Bolívar en relación con el narcotráfico como fuente de

⁴² *El Tiempo*. "En el corazón de la guerra de paramilitar en los Llanos". Julio 24 de 2004.

financiación al igual que “conductas hostiles por partes de las Autodefensas Unidas de Colombia:

“«(Carlos) Castaño nos vendió a nosotros un proyecto político, pero iba detrás de los narcos», dice, explicando el origen de sus diferencias con las Auc y de su guerra con el Bloque Centauros. Los Buitrago dicen que hicieron parte, con otras autodefensas que llaman “clásicas”, del primer Estado Mayor de las Auc, en 1997, pero empezaron a desconfiar viendo caer, uno tras otro, los disidentes. «Mataron a ‘Camilo Morantes’ (del Cesar, que lideró la toma de Barranca), a ‘Gustavo Tafur’, del Tolima (ahora reemplazado por ‘Daniel Roa’, del Centauros); le abrieron la guerra a Hernán Giraldo (de los ‘paras’ de la Sierra Nevada). Mataron a ‘Rodrigo Doble Cero’ (jefe del extinto Bloque Metro, de Antioquia). Y al propio Castaño»”⁴³.

Para diciembre de 2003, Martín Llanos había sido sacado por el Bloque Centauros de los territorios del centro del Meta, los cuales según él habían sido delimitados como “territorio nuestro” en una negociación con Vicente Castaño en el 2002. Coincide esta con la zona del Meta que según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen tuvo la mayor expansión de cultivo de coca entre 2001 y 2003 en esta parte del país.

Los cruentos combates en los Llanos –a mediados de 2004 se registraban más de 600 combatientes muertos– también tuvieron sus réplicas Bogotá. La disputa por el control del sector de Sanandresito de la 38 se prolongó hasta finales del año 2003, y aparentemente la consolidación de “Frente Capital” en el sector fue marcado por un carrobomba que estalló en Octubre de 2003, que dejó 6 muertos y 21 heridos.

Simultáneamente hubo una oleada de violencia homicida en Ciudad Bolívar y Altos de Cazuca en las periferias urbanas de Bogotá y Soacha. En agosto se reportaron denuncias de los dueños de negocios fueron víctimas de extorsión para financiar “grupos de seguridad”. Se arreciaron las amenazas de muerte, las listas y graffiti declarando “objetivo militar” a cientos de jóvenes residentes en estos sectores por “mariguaneros, sapos y guerrilleros”, al igual que los asesinatos durante el día, la persecución y asesinato de afiliados a organizaciones de desplazados y el segundo desplazamiento forzado de sus familias, las extorsiones y ejecuciones macabras con la exhibición de cadáveres descuartizados en sitios de tránsito intenso por parte de pobladores locales. En octubre la Policía de Cundinamarca anunció el desmantelamiento de una banda delincencial conocida como “Los Paracos”, presuntamente vinculadas con el Bloque Capital de Miguel Arroyabe, que se dedicaba desde hacía un año al asesinato de jóvenes que habitaban en estos sectores. Más de 70 asesinatos se le atribuyeron a la banda que actuaba bajo las órdenes de José Oliver Rodríguez Díaz, alias “José Muelas”, cuyos integrantes fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

No hay fuentes de información que permitan confirmarlo, pero es probable que los operativos adelantados por las autoridades en contra de unidades del Frente Capital en Ciudad Bolívar y Altos de Cazuca partir de ese momento –y que desde entonces han

⁴³ Ibid.

arrojado al capturas de cerca de 200 integrantes vinculados a esta estructura– hayan contado con informaciones suministradas por efectivos del Frente República a órdenes de Martín Llanos en Bogotá. De este último se sabe que fue expulsado de Bogotá por el Frente Capital en diciembre de 2003, luego del asesinato Carlos Gil, cabecilla del Frente Capital. Hasta ese entonces hubo informes de la presencia esporádica de unidades del Frente República en los barrios orientales de Ciudad Bolívar y Usme. Algunas fuentes incluso afirman que unidades que hacían presencia a nombre del Frente República en estos sectores urbanos, tenían su residencia en Altos de Cazuca en Soacha.

5. El proceso de negociación y la “fractura” del Bloque Centauros y el Frente Capital en Cundinamarca y Bogotá.

5.1 La “Declaración de Paz” de las AUC.

Entre las primeras gestiones que realizó el gobierno de Uribe en desarrollo de su política de paz, fue tramitar la aprobación de Ley 782 de 2002, por medio de la cual se prorrogó durante 4 años el marco jurídico entonces vigente (leyes 418 de 1997 y 548 de 1999), que otorga al gobierno nacional facultades para adelantar diálogos y suscribir acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación y en reincorporación a la vida civil. Además de la prórroga, el marco jurídico también fue modificado en un punto sustancial. A partir de la promulgación de la nueva ley se abandonó el requerimiento anterior del reconocimiento del carácter político por el gobierno de la organización armada al margen de la ley como condición previa para poder establecer conversaciones y diálogos con las mismas.

A partir del 1º de diciembre de 2002, unas semanas antes de la promulgación de la ley 782, las Autodefensas Unidas de Colombia declararon un cese unilateral de hostilidades, “con el propósito de facilitar los caminos para que el Estado colombiano se haga cargo de brindar protección y seguridad a todos los ciudadanos de las diferentes poblaciones y comunidades liberadas por nosotros del flagelo subversivo”⁴⁴. A la vez advirtieron que harían uso del “derecho de legítima defensa... si durante este cese de hostilidades, en algún momento la guerrilla vulnera los territorios en los que hasta la fecha hemos mantenido el control y nuestra acción armada”⁴⁵. Con esta provisión, dejaron a su propia discreción la posibilidad de declarar objetivos militares a quienes, según su criterio, pudieran considerarse como “guerrilla”. Además justificaron la no adhesión de los todas las agrupaciones paramilitares al cese al fuego, dado que “le estamos apostando a un proceso de construcción de Paz en un momento en el que no ha cesado el accionar nefasto de la subversión armada... [y que] el carácter confederado de las Autodefensas colombianas permite a cada una de sus fuerzas integrantes el ejercicio de su plena autonomía y libertad de decisión y movimientos”⁴⁶.

⁴⁴ Ver “Declaración de paz por Colombia” en <http://www.bloquenorteauc.com/biblioteca/detalle.php?id=297%20&%20tipo=Archivo> (Marzo 26 de 2004)

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid. En esta declaración las AUC todavía se expresan con términos conciliatorios hacia aquellas unidades de paramilitares que en ese momento mantenían distancia con los diálogos con el gobierno de Uribe, entre ellas, el Bloque Central Bolívar bajo el mando de alias “Ernesto Baéz”, “Julián Bolívar” y “Javier Montañés” o “Macaco” (que agrupa en sus filas a los Bloques Putumayo, Vencedores de Arauca y Libertadores del Sur), al igual que las Autodefensas del Casanare bajo el mando de alias “Martín Llanos” y el Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU– bajo el mando de alias “Rodrigo”. A todos estos comandantes les reconocieron “su legítimo derecho y... autonomía... en espera de que se den las condiciones... adecuadas para entrar a formar parte de la negociación”.

En la misma declaración manifestaron su disposición inmediata para iniciar diálogos con el gobierno nacional, con el acompañamiento y veeduría de la Iglesia católica, OEA, ONU y el Movimiento Nacional e Internacional de Iglesias Cristianas, con el fin de acordar los términos para su desmovilización y reincorporación a la vida civil. Con este propósito solicitaron la suspensión de las acciones legales contra los miembros negociadores de las Autodefensas así como la reciprocidad en el cese al fuego del Estado “hacia nuestras tropas, demás integrantes y simpatizantes”. Además en la declaración enmarcaron sus actos como “acciones de tipo político... realizadas como suplencia del Estado ausente frente a sus obligaciones”, y solicitaron el reconocimiento por parte del gobierno “en todos los ámbitos a su alcance, la condición del Movimiento Nacional de Autodefensas como actor del conflicto armado y político colombiano”, al igual que los medios pertinentes para la excarcelación de los integrantes de las AUC que permanecen en las cárceles a disposición de la justicia colombiana. Finalmente advirtieron que no renunciarían a “nuestro derecho de recibir donaciones” y señalaron como condición para la viabilidad del cese de hostilidades que “lo largo del proceso de negociaciones, el Gobierno disponga de los mecanismos financieros pertinentes que garanticen el sostenimiento económico de nuestras tropas en todo el territorio nacional”⁴⁷.

5.2 Mientras tanto, en Cundinamarca y Bogotá...

El año 2002 representó un pico en los homicidios registrados en Cundinamarca, como se puede observar en la siguiente figura:

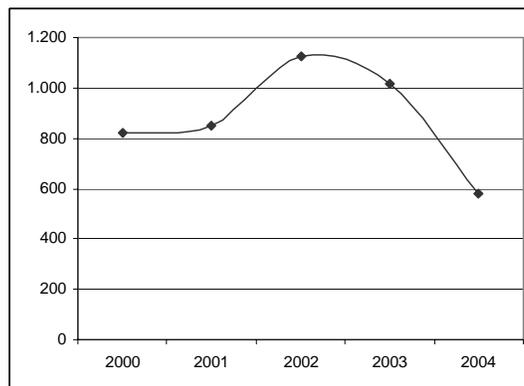


Figura 6: Cundinamarca: Homicidios 2000-2004

Fuente: Policía Nacional - CIC_DIJIN

Un número importante de estas víctimas cayó como consecuencia de la disputa por el control de las cabeceras urbanas entre las estructuras insurgentes y los paramilitares, particularmente en los municipios del occidente del Departamento. Durante este año Soacha, Girardot, Facatativá, Fusagasugá, entre otras, recibieron oleadas de desplazados forzados provenientes de municipios como La Palma, Villeta, San Juan de Río seco, Viotá, Cachipay, El Colegio, Granada, Silvania y Pasca, y otros más, donde la FARC amenazaba a dignatarios locales para que renunciaran a sus cargos para paralizar la administración pública, mientras que diversas agrupaciones paramilitares lanzaban amenazas generalizadas contra la población, cometían homicidios selectivos de dirigentes comunitarios y hacían “limpiezas sociales”.

⁴⁷ Ibid

Las Autodefensas Campesinas de Cundinamarca bajo el mando de Luis Eduardo Cifuentes, alias “El Aguila” aterrorizaron los municipios de Villeta, La Palma, La Peña, Topaipí, mientras que las Autodefensas del Magdalena Medio bajo el mando de Carlos Hernán Hernández Giraldo, alias “El Pájaro”, asolaba otros municipios del noroccidente cundinamarqués, entre ellos, Nariño, Gautaquí, San Juan de Ríoseco, Chaguaní, Guaduas, Nimaima.⁴⁸ Por su parte en el suroccidente, las Autodefensas Campesinas de Casanare bajo del mando de alias “Martín Llanos” cundían el horror entre los pobladores de Fusagasugá, Silvania y Viotá, mientras que en los municipios del oriente cundinamarqués, entre ellos, Machetá, Gachetá, Gachalá, y Medina, hacían presencia unidades del Bloque Centauros.

A pesar de la “declaración de paz” de las AUC de diciembre de 2002, la violencia sangrienta realmente no cedió en Cundinamarca sino hasta el año 2004. Durante la mayor parte del 2002 y 2003 los homicidios mensuales se mantuvieron por encima de 80 incidentes, y como puede apreciarse el comportamiento del desplazamiento también registró un pico en estos años.

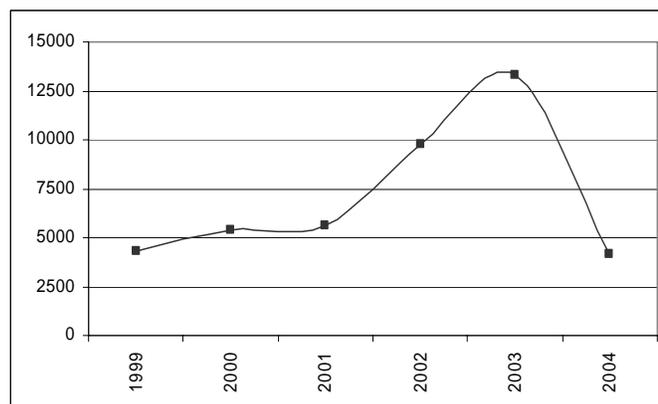


Figura 7: Cundinamarca: Desplazamiento forzado 1999-2004

Fuente: CODHES

El año 2003 coincidió con el inicio de la operación *Libertad I*, con la cual las Fuerzas Militares consolidaron su control sobre la iniciativa militar en el centro del país. La operación fue precedida en 2002 por una fuerte ola de desplazamiento proveniente de los municipios del noroccidente y particularmente el de La Palma⁴⁹, donde guerrilla y paramilitares disputaban violentamente el control de la población y el territorio. Fue en este contexto en el cual trascurrió la operación de “cerco y aniquilamiento” realizada por los soldados de la V División del Ejército Nacional y de la FUDRA, que eventualmente condujo al desmantelamiento del Comando Conjunto Occidental y el frente 22 de la FARC, al igual que el repliegue del resto de las estructuras militares, financieras y logísticas de esta agrupación insurgente en Cundinamarca.

Simultáneamente durante el primer semestre de 2003 en el suroccidente del Departamento y específicamente en el municipio de Viotá se registraron acciones de

⁴⁸ Ver Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH – Vicepresidencia de la República, 2005 *Dinámica reciente de la confrontación...* pp. 27 -29.

⁴⁹ De acuerdo con los registros de la Consultoría Para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES–, durante el primer trimestre de 2002, la cabecera municipal de La Palma recibió 2.000 personas desplazadas y luego durante el tercer trimestre 900.

desaparición forzosa, torturas y homicidios selectivos de civiles, tanto en áreas rurales como la cabecera del municipio, entre ellos el registrador municipal, varios concejales y dirigentes políticos y comunales.⁵⁰ Estas acciones fueron atribuidas a las Autodefensas Campesinas de Casanare, y en algunas denuncias contra ellas se relacionaron explícitamente con el *Plan Candado*, desarrollada por la Fuerza Pública en los alrededores de Bogotá desde el año 2002 dentro de las acciones diseñadas para contener la acción insurgente en la ciudad luego de la terminación de la zona desmilitarizada del Caguán.⁵¹

El primer semestre de 2003 además presencié el inicio de hostilidades abiertas en Cundinamarca entre unidades de las AUC y las Autodefensas Campesinas de Casanare que permanecían renuentes a integrarse a los diálogos con el gobierno. Conviene recordar que desde el mismo día en que se promulgó la ley 782, el presidente Uribe había designado una “comisión exploratoria”⁵² con la misión de entablar contactos directos con los grupos paramilitares que firmaron la “declaración de paz” a fin de buscar formulas para avanzar en el proceso de paz con ellos. Desde los primeros contactos la comisión insistió enfáticamente en la necesidad de congregarse a las diversas agrupaciones de para militares en una sola “mesa nacional de paz” y en la concentración de las fuerzas irregulares a fin de facilitar tanto el proceso de desmovilización como la verificación del cese al fuego. Por consiguiente es probable que las diferencias que mantenían a los grupos renuentes a unirse al diálogo de las AUC con el gobierno se hubieran radicalizado a raíz de este imperativo y fue así como a partir de mayo de 2003 en Cundinamarca y Bogotá se desató una “guerra” entre las AUC y las Autodefensas Campesinas de Casanare ACC.

Uno de los escenarios de esa “guerra” fue el suroccidente de Cundinamarca, donde el Bloque Cenatureros desplazó a las ACC de las áreas que esta había controlado hasta entonces.⁵³ Otro principal tuvo lugar en diversos sectores de la ciudad de Bogotá y Soacha. Según la revista *Cambio*:

“Con cerca de 120 hombres, Llanos logró dominio en sectores como Suba, Los Mártires, Germania y Usme, mientras Arroyabe, al frente de cerca de 400 hombres, se hizo a sectores como el barrio Restrepo, Kennedy, Puente Aranda, Las Ferias, 7 de Agosto, Bosa, y Cazucá, entre otros. A punta de amenazas y extorsiones, uno y otro fueron sumando jugosos ingresos a cambio de dar seguridad a industriales, comerciantes y tenderos, ingresos que recaudaban a través de las llamadas

⁵⁰ Ver CINEP, *Op cit*, pp. 454 – 459. Según CODHES, durante el primer trimestre de 2003 la cabecera de Viotá recibió 5.856 personas víctimas del desplazamiento forzado y luego durante el segundo trimestre, 3.000.

⁵¹ CINEP, *Op. cit.*

⁵² Esta comisión fue integrada por funcionarios del Alto Comisionado de Paz, entre ellos, Juan B. Perez , Ricardo Avellaneda, Carlos Franco, Eduardo Espinosa, Jorge I. Castaño, y Gilberto Alzate.

⁵³ Ver Programa Presidencial... *Op.cit.* p. 30. Según esta fuente, en carta fechada 16 de Abril de 2003 y dirigida a Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado de Paz, por “Martín Llanos”, este último confirmó su presencia en la región: “Igual ocurrió con nuestra presencia en Viotá, región del Tequendama en Cundinamarca... Ahí no hemos cometido atentados contra la inoocente y sufrida población civil, ni mucho menos promovemos el desplazamiento forzado de sus pobladores, sino que lo que pretendemos es desplazar la guerrilla y sus auxiliares, para que los verdaderos y silenciosos desplazados por las guerrillas, vuelvan a su terruño y rindan homenajes fraternales a sus parientes y amigos asesinados por las Farc y su brazo político en estas décadas de sometimiento forzado.” A partir del segundo semestre de 2003 una comisión conjunta de la Fiscalía, Policía Judicial y Ejército capturó y judicializó a varios de los responsables de las desapariciones, torturas y homicidios denunciados en Viotá durante la primera mitad de ese año.

*oficinas de cobro en los Sanandresitos, Corabastos y el 7 de Agosto.*⁵⁴

5.3 La muerte de Arroyabe y la fractura del Bloque Centauros y el Frente Capital

Como se refirió en un aparte anterior, la disputa por el control de territorios en Bogotá y Cundinamarca condujo a la expulsión de Martín Llanos. Durante el primer semestre de 2004, se escaló el choque entre el Bloque Centauros y las ACC en el centro del Meta y sur del Casanare, mientras los Bloques Central Bolívar y Vencedores de Arauca se unieron a la mesa única de diálogo de las AUC, incorporando a alias “Ernesto Baez”, “Julián Bolívar” y “Javier Montañés” al “Estado Mayor negociador” partir del abril de ese año. Entre tanto, en Antioquia las ACCU exterminaron al Bloque Metro, ante la renuencia de su comandante alias “Rodrigo” de integrarse a la mesa por considerar que allí se estaba negociando con el narcotráfico, a la vez que Carlos Castaño, quien también se había apartado de los diálogos con el ingreso de Bloque Central Bolívar a las mesa de diálogo con el gobierno, se vio involucrado en un incidente armado en el que, según distintas versiones, murieron algunos de sus escoltas y él resultó desaparecido.⁵⁵

A partir de julio de 2004 se instaló la zona de ubicación en Santa Fe Ralito, donde en principio se concentraron los 10 comandantes integrantes de la mesa de negociación con un apoyo de seguridad de unos 400 hombres de sus filas, para dar inicio a la negociación de la desmovilización paramilitar. El inicio de las negociaciones se vio entorpecido por los violentos choques entre el Bloque Centauros de Arroyabe y las Autodefensas Campesinas del Casanare de “Martín Llanos”, que generaban zozobra entre la población afectada en la zona de guerra, no sólo por los desplazamientos forzados que esta situación generó, sino también por los intensos reclutamientos de jóvenes y extorsiones que tuvieron lugar colateralmente.

Finalmente, luego de un “ultimátum” del gobierno para la desmovilización inmediata de las Autodefensas Campesinas del Casanare y el Bloque Centauros, en agosto cesaron las hostilidades entre estos grupos. En ese momento se ventiló con euforia la expectativa que se crearían localmente zonas provisionales de ubicación para la concentración de las ACC, el Bloque Centauros y el Bloque Vencedores de Arauca. Sin embargo nunca se llegó a acuerdos en torno a una propuesta concreta. Mientras tanto en Santa Fe Ralito urgía avanzar en la definición de un marco de “alternatividad penal” para regular jurídicamente la desmovilización. Fue en estas circunstancias cuando en septiembre ocurrió primero el triple asesinato de los dirigentes políticos del Meta, Euser Rondón, Carlos Sabogal y Nubia Sánchez, que los investigadores atribuyeron al grupo liderado por Miguel Arroyabe.⁵⁶

Una semana después el propio Arroyabe fue asesinado en el Meta. Se dice que salió de la zona de ubicación en Santa Fe Ralito el 19 de septiembre con un permiso oficial del gobierno nacional y que fue asesinado por sus propios hombres en San Fernando de Casibare del municipio de Puerto Lleras. El gobierno afirmó que el desplazamiento de Arroyabe tenía como finalidad *“reunir a sus hombres para proceder a su inmediata*

⁵⁴ “¿Ciudad perdida?” en www.revistacambio.com/html/pais/articulos/2181/ citado en *ibid.* p. 65.

⁵⁵ Ver “Segundo aire a negociación con los paramilitares tras acuerdo de zona especial para sus jefes”, *El Tiempo*, mayo 13 de 2004.

⁵⁶ Ver “Conejo a la cordobesa”, *Revista Cambio* No. 587., Sept.27 de 2004, pp.34-37.

desmovilización”, pero una vez conocida la noticia de su muerte, fuentes de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) afirmaron que Guillermo Torres, jefe de las Autodefensas Campesinas de Vichada (ACV), había unido sus tropas a las de alias “Javier Montañés” o “Macaco”, uno de los líderes del Bloque Central Bolívar (BCB), grupo paramilitar que pensaba expandir su radio de acción al departamento del Guaviare. Según se dice, “Macaco” le compró a Guillermo Torres las ACV, tropa que operaba en Puerto López, Puerto Gaitán y parte del Vichada, pues ello le garantizaba un paso estratégico hacia el Guaviare.

Según esta versión, el movimiento del BCB habría molestado a Arroyabe y que su desplazamiento a la zona tendría la finalidad de conocer de primera mano lo que venía sucediendo e intentar “poner la casa en orden”. Por esto, al decir de algunos de sus allegados, su muerte se habría fraguado directamente en Santa Fe Ralito, pues se sabe que en los últimos tiempos Arroyabe tenía profundas diferencias con Salvatore Mancuso, “Don Berna” y “Jorge 40”, en relación con el manejo del “negocio” del narcotráfico. Es de anotar que, de acuerdo con la versión oficial del gobierno y de los propios paramilitares, el atentado que le costó la vida a Miguel Arroyabe, habría sido una acción unilateral de Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias “Cuchillo”, o “Didier”, comandante paramilitar en el departamento del Guaviare⁵⁷.

Según el relato de inteligencia, Arroyabe recibió alrededor de 60 impactos de fusil, uno de los cuales ingresó por la parte posterior del cráneo y le desfiguró la cara. Con él murieron también sus escoltas Juan Alberto Moreno Alcántara, alias “Lucas”, uno de los encargados de las finanzas, Nelson Parra Sarmiento, alias “Santiago” y, alias “Chepe”, de 22 años, sobrino de Arroyabe.

Casi de inmediato los jefes militares y financieros del Frente Capital en Bogotá y Soacha comenzaron a caer presos en manos de las autoridades. En palabras interceptadas por los organismos de seguridad de una conversación entre jefes de facciones del Bloque Centauros en 12 de noviembre de 2004:

*Esto está putiado. Ya van como veinte muertos y el de la J (Jorge Pirata) es el de la vuelta. No se, parece que el hermano de don “Arcángel” (Arroyabe) que era el que le manejaba todo, está cascando gente en Bogotá ...Ayer dizque se tumbó otros dos, y al comandante de la urbana (Frente Capital), ese que tenía don Jorge por allá, también lo sacaron volando”*⁵⁸

A raíz de la fractura que ocasionó la muerte de Arroyabe, las autoridades tuvieron la oportunidad de capturar y judicializar entre otros a los siguientes jefes militares y financieros vinculados con el Frente Capital:

- *José Emilio Moreno Quezada*, alias “El Indio”, encargado de dirigir las actividades de inteligencia del Frente Capital en Soacha y Ciudad Bolívar, además de coordinar el cobro de extorsiones al comercio y a las empresas transportadoras del sector, el

⁵⁷ Pedro Oliverio Guerrero Castillo, conocido con el alias de “Didier” o “Cuchillo”, tiene alrededor de 35 años. Se dice que comenzó a militar en las autodefensas cuando Gonzalo Rodríguez Gacha, “El Mexicano”, montó los primeros grupos paramilitares. En los años 90’s comandó la lucha contraguerrillera en el Guaviare y, cuando Arroyabe se quedó con el Bloque Centauros, se ganó su confianza y quedó al mando de la facción paramilitar que le disputó a las FARC la región del Guaviare.

⁵⁸ Ver: “Tras la muerte de Arroyabe, el Bloque Centauros se partió en tres”. El Tiempo. 12 de noviembre de 2004. Página 1-3.

reclutamiento de menores de edad, el tráfico de armas, municiones y explosivos y los asesinatos de jóvenes y dirigentes comunales, fue capturado por la Policía Nacional en el barrio La Isla, sector de Altos de Cazucá el 29 de septiembre de 2004.

-*Eduardo Orlando Benavides*, alias “Don Álvaro”, considerado en su momento como el jefe máximo del Frente Capital, a quien las autoridades acusan de participar en el asesinato de el ex gobernador del Meta Carlos Sabogal Mojica, el ex candidato a esa gobernación Euser Rondón y la diputada Nubia Inés Sánchez, fue capturado por unidades de la Fiscalía en Cali el 29 de noviembre de 2004.

- *Oscar Hernando Vanegas*, hombre de confianza de “Don Álvaro” y escolta personal de la senadora Rocío Arias, quien ha aparecido públicamente como vocera de los paramilitares, fue capturado por unidades de la Fiscalía en Cali el 29 de noviembre de 2004).

- *Jairo Vilorio*, alias “Andrés”, sindicado de ser jefe de sicarios del Frente Capital capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá en Suba en octubre de 2004.

-*Rubían Tovar Rodríguez* alias “Rubiano” y *José Fernando Fajardo*, alias “Chepe”, sindicados de ser cabecillas del Frente Capital en Ciudad Bolívar que dirigían el cobro de extorsiones a empresas de transporte en los paraderos de buses de los barrios Lucero, Paraíso; Vista Hermosa, Barrios Unidos, Arabia, San Joaquín, Perdomo, Tres Reyes, Tres Esquinas, Cazuca, Sierra Morena y en los municipios de Soacha y Sibaté, capturados por la Policía nacional en Bogotá y La Mesa, Cundinamarca, respectivamente febrero de 2005.

- *Edison Alfredo Sánchez*, *Nelson Orjuela Gómez*, alias “Araña”, *Alirio Vargas Ardila*, alias “Alirio”, a *Dani Alexander Vanegas Fajardo*, alias “el Mono” y *Elkin Mauricio Acevedo*, alias “Acevedo” ó “Estiven”, sindicados como cabecillas del Frente Capital en Bosa, Ciudad Bolívar y Usme, capturados por la Policía en abril de 2005. Según las autoridades Edison Alfredo Sánchez había sido enviado por el Frente Capital para desplazar a Acevedo de Ciudad Bolívar y este último se había replegado a Bosa. Alirio Vargas es sindicado de ser jefe de un grupo de “limpieza social” a filiado a las AUC en Usme. Por su parte, Dani Alexander Vanegas y Elkin Mauricio Acevedo son sindicados de ser el primer y segundo cabecilla de la red de extorsión del Frente Capital en Ciudad Bolívar.

-*Rafael Armando Forero Hernández* alias “El Zarco”, sindicado del triple asesinato de los políticos del Meta Carlos Javier Sabogal, ex alcalde de Villavicencio, Nubia Sánchez, diputada de la Asamblea, y Euser Rondón, ex candidato a la gobernación, ocurrido el 13 de septiembre del 2004, capturado en mayo de 2005 en Carmen de Apicalá. El “Zarco” se autoatribuye haber sido jefe del Frente Capital en Bogotá hasta la muerte de Miguel Arroyabe en septiembre de 2004.

-*Miguel Ángel Pérez* alias “El Cojo”, sindicado de ser cobrador de extorsiones en el sector de Sanandresito, a ordenes de Azaid Carreño Amaya, alias “El Alcalde”, es capturado por la Policía en el mes de Junio de 2005.

Este desmantelamiento de gran parte de la organización militar y financiera del Frente Capital es propicia para que desde el 2004 se presenten intentos de adueñarse del

control de sectores estratégicos como Sanandresito y por parte de diversas organizaciones que habían sido desplazadas en el pasado por esta estructura, -entre ellas las ACC y el frente 43 de la FARC-, al igual que por facciones del Bloque Centauros ubicadas en el Meta que también aspiran ello. No hay que olvidar que la oleada de violencia que se presentó en Kennedy desde mediados de mayo hasta finales del mes julio del año 2005, cuando se registraron 30 homicidios concentrados en los alrededores de Corabastos (11 en Patio Bonito, 9 en El Amparo y 3 en María Paz) y la zona industrial de Carvajal (7), se ha relacionado con la llegada de una “comisión del Meta” para relevar por la fuerza a quienes operaban la red de extorsión en el sector.

La puja actual se agudiza aún más por la circunstancia de que probablemente haya volúmenes considerables de estupefacientes provenientes del Meta -donde la actividad el desmantelamiento de laboratorios de procesamiento de coca ha sido notablemente exigua en relación con el resto del país- que deben ser liquidados antes de finalizar el año 2005 cuando se cumple el plazo pactado para la desmovilización de las estructuras de la AUC en todo el país.

6. Conclusiones

6.1 Cundinamarca y Bogotá en los tiempos de la desmovilización paramilitar

El 9 de diciembre de 2004 se produjo la desmovilización de 147 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Cundinamarca, al mando de Luis Eduardo Cifuentes, alias “El Águila”. La tropa se concentró en una zona de ubicación temporal, en el Instituto Técnico Agrícola “Luis Carlos Galán”, ubicado en el corregimiento de Terán, municipio de Yacopí. Con “El Águila”, se desmovilizaron “Tumaco”, responsable de los municipios de Pacho y Zipaquirá; “Peligro” encargado de Caparrapí; “Buena Suerte”, comandante en Topaipí; “El Pote” en Yacopí; “Guri-Guri”, en La Palma y Llano Mateo.⁵⁹

Según “El Águila”⁶⁰ el desmantelamiento del frente 22 habría sido el resultado principal de la acción de su grupo y no de la Operación *Libertad 1*. Hasta el momento de su desmovilización, las Autodefensas Unidas de Cundinamarca registraban 8 años de actividad y presencia en el área que había sido controlada en su momento por el capo narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, socio principal de Pablo Escobar en los tiempos del *Cartel de Medellín*. Luego de la muerte de Rodríguez Gacha a principios de los años 90, su ejército privado se habría desmantelado mientras simultáneamente se fortalecía la presencia del frente 22 en el noroccidente de Cundinamarca. El grupo de “El Águila” se formó a finales de los 90 para contrarrestar la acción insurgente local, con apoyo y entrenamiento recibido de las Autodefensas de Magdalena Medio al mando

⁵⁹ Ver Fundación Seguridad y Democracia 2005 “La desmovilización paramilitar en Cundinamarca” en <http://www.seguridadydemocracia.org/docs/pdf/ocasionales/desmov11.pdf>

⁶⁰ Luis Eduardo Cifuentes, figura en la lista de *segundos cabecillas* del terrorismo y el narcotráfico publicada el 19 de febrero de 2004 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, enfrenta cargos de narcotráfico, formación de grupos paramilitares, así como la tortura y el asesinato de los agentes de policía, capitán William Javier Montilla y Ancizar Sánchez, cuyos cuerpos fueron hallados el 25 de octubre de 1998, cerca a Puerto Salgar, Cundinamarca. Según la *Revista Cambio*, en 1999 Cifuentes fue relacionado con un plan frustrado de asesinato del presidente Andrés Pastrana. “El Águila” también se ha relacionado con las amenazas contra defensores de los derechos humanos, entre ellos a algunos miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Ver Fundación Seguridad y Democracia...*Op. cit.*

de Ramón Isaza, uno de los integrantes principales del “Estado Mayor” negociador de las AUC en Santa Fe Ralito.

Meses después, a principios de septiembre del 2005, se desmovilizó una facción del Bloque Centauros integrada por 1.135 efectivos al mando de Vicente Castaño Gil⁶¹ en la finca Corinto, en el corregimiento de Tilodirán, a media hora de Yopal en el departamento de Casanare. En su intervención dentro de la ceremonia formal de la entrega de armas, Castaño Gil invitó a las demás facciones del Bloque Centauros al mando de “Jorge Pirata” (ahora denominada como Bloque Meta) y “Didier”ó “Cuchillo” (al mando de la facción que ahora se denomina Bloque Guaviare) al igual que a las Autodefensas Campesina del Casanare al mando de “Martín Llanos”, a unirse al proceso de negociación y desmovilización que adelantan las AUC con el gobierno. A la vez reiteró la propuesta hecha por otro integrante del “Estado Mayor” negociador, “Ernesto Baéz” de realizar una consulta popular “acerca de la suerte que nos merecemos” y luego de pedir perdón a las víctimas de las acciones de las AUC, insistió que esta agrupación participará abiertamente en política:

“Nosotros (las AUC) no desaparecemos. Las autodefensas se transforman: seremos un gran movimiento, un movimiento que exige participar en las grandes decisiones de la nación”.⁶²

Frente a estas muestras de buena voluntad y “hechos de paz” de parte de algunas de estructuras de las AUC con influencia en Cundinamarca y Bogotá, ¿cuál es el escenario que se perfila en el centro del país en relación con las agrupaciones que aún no manifiestan sus intenciones de desmovilizarse y acogerse al marco jurídico establecido para su reincorporación a la vida civil de la ley de “justicia y paz” recientemente promulgada por el gobierno⁶³?

La respuesta al interrogante anterior, probablemente estará muy relacionada con las dinámicas del narcotráfico en Colombia en el futuro. Las medidas para combatir los cultivos de coca de uso ilícito en el sur del país dentro del marco del *Plan Colombia*, han llevado a la reubicación de áreas de producción al igual que al establecimiento de nuevas rutas hacia los mercados de consumo final. Una de las zonas de mayor auge en el pasado reciente ha sido la del centro del Meta y Guaviare, área en la cual había rutas de narcotráfico controladas por la FARC, específicamente por alias el “Negro Acacio”, en alianza con uno de los principales narcotraficantes brasileros, alias “Fernandinho”. Las operaciones que realiza en Ejército Nacional dentro del *Plan Patriota*, cuyo propósito es hacer un cerco de aniquilamiento de la principal fuerza de combate de la

⁶¹ Vicente Castaño Gil, alias “El Profe”, según la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional –DIJIN– fue, con “Don Berna”, el cerebro de la venta de bloques paramilitares a narcotraficantes como Francisco Javier Zuluaga, ‘Gordo Lindo’; Miguel Arroyabe, y los mellizos Mejía Múnera, por lo cual habría jugado un papel clave en el proceso de integración de la “mesa única de negociación” que posibilitó la materialización de los acuerdos de Santa Fe Ralito entre las AUC y el gobierno nacional. Es señalado por los asesinatos de los congresistas araucanos José Octavio Sarmiento y Gustavo Colmenares. Lo acusan de ordenar el atentado contra el representante a la Cámara Wilson Borja, en el 2000. David N. Kelley, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, lo reclama, junto a Diego Fernando Murillo (‘Don Berna’), por “haber proporcionado cómplices con rutas para la importación de miles de kilos de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos”. Su orden de extradición está suspendida, en atención a su estatus de negociador. Ver “La cúpula paramilitar reiteró este sábado sus intenciones de participar abiertamente en política” en *El Tiempo*, Septiembre 3 de 2005.

⁶² Ibid.

⁶³ La ley 975 del 25 de julio de 2005, dicta disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, al igual que otras disposiciones para acuerdos humanitarios.

FARC en su propia retaguardia, entorpecen la operación las antiguas rutas en el área y además han creado oportunidades para que estructuras como el Bloque Guaviare, la mando de “Didier” ó “Cuchillo” y el Bloque Meta al mando de “Jorge Pirata”, controlen esta importante área de producción importante con sus respectivas rutas.

A juzgar por las recientes incautaciones de estupefacientes realizadas recientemente en Bogotá –el primero de agosto de 2005, la Brigada 13 del Ejército decomisó 3,8 toneladas de cocaína ocultas en cilindros de caucho sintético, en una bodega al norte de Bogotá, aparentemente de propiedad del Cartel del Norte del Valle– la capital colombiana representa hoy un punto de enlace importante en las rutas del narcotráfico, posiblemente tanto como puerto de exportación, como centro de consumo. Además, dada la urgencia de liquidar activos ilegales y “lavar” dineros que previsiblemente acompañará todo el proceso de desmovilización paramilitar, Bogotá probablemente ofrece muchas oportunidades de hacer operaciones de esta naturaleza de difícil detección, dadas sus dimensiones físicas y económicas.⁶⁴

Rafael Armando Forero Hernández, alias “El Zarco”, en una solicitud dirigida desde la cárcel Modelo de Bogotá al Alto Comisionado de Paz para acogerse a la ley 782 de 2002, recientemente se autoatribuyó haber tenido el control en el pasado del Frente Capital. Manifiesta el “Zarco” su intención de acceder a la condición de desmovilizado junto con los efectivos a su mando y actuar como vocero representante del Frente Capital en una eventual entrega de armas. De acuerdo con su versión, después de la muerte de Arroyabe el Bloque Centauros se fraccionó y la mayoría de los integrantes del Frente Capital que estaban bajo su mando se fueron para los dos grupos que se formaron bajo el mando de “Didier” ó “Cuchillo” (Bloque Guaviare) y “Jorge Pirata” (Bloque Meta). Entonces estalló una guerra por el control de Bogotá entre ellos. Más de 100 personas habrían muerto en esa guerra, que para finales de 2005 habría sido ganada por “Jorge Pirata”, quien tendría asegurado para sí el control territorial sobre el sector del Sanandresito de la carrera 38.⁶⁵

Pero la dinámica del narcotráfico en Bogotá y Cundinamarca no sólo depende de las estructuras paramilitares que aún no se desmovilizan en los Llanos Orientales. También la estructura que opera en el noroccidente de Cundinamarca bajo el mando de alias “El Pájaro”, juega un papel destacado en este negocio.

⁶⁴ Entre las modalidades utilizadas con de mayor frecuencia detectados por las autoridades se destacan: 1) transacciones internacionales a través de exportaciones ficticias de bienes y servicios; 2) el “testaferrato forzado” en el cual se realiza el pago de “propinas” o la intimidación de personas para que presten sus cuentas y autoricen millonarios movimientos; 3) el despojo de tarjetas y chequeras a plagiados, a quienes se les exige entregar autorizaciones para hacer transacciones a su nombre, a cambio de la promesa de liberarlos. 4) adquisición por vía de la compra o “expropiación” de finca raíz y empresas; 5) conformación de cooperativas a las que son ‘asociadas’ mediante intimidación personas para mezclar transacciones legales con ilegales; 6) el pago de secuestros se exige sea realizado en el exterior y luego el dinero se ingresa al país ‘a través de medios electrónicos o vía Internet; 7) la compra de “premios o herencias’, con precios más alto para adquirir los derechos correspondientes. El control territorial de la seguridad en sectores comerciales de gran movimiento como la central mayorista de alimentos –Corabastos– y las zonas de comercio mayorista de bienes intermedios y consumo como el área de influencia del Sanandresito de la carrera 38 en Bogotá, ofrece notorias ventajas para practicar muchas de estas modalidades de manera desapercibida para las autoridades. Ver “Estas son las vías más usadas para blanquear dinero”, *El Tiempo*, Sept. 10, 2005.

⁶⁵ Ver “Jefe del frente Capital que opera en Bogotá, ofrece su desmovilización”, *El Tiempo*, Oct. 18 de 2005. Entre los muertos más reconocidos dentro de la estructura militar del Frente Capital que cayeron en esta “guerra” figuran Azaid Carreño, alias “El Alcalde”, Fabián Valderrama Arciniegas alias “Lleras”, y Jerson Ramírez Garzón, alias “Burro”, considerados en su orden, quinto, sexto y séptimo en la línea de mando militar del Frente Capital en Bogotá.

De acuerdo con los informes de prensa, el “Pájaro” habría comenzado su vida ilegal a finales de 1999, como cabecilla de un grupo de las autodefensas del Magdalena Medio en Puerto Boyacá, bajo el mando de Ramón Isaza y Víctor Rafael Triana, 'Botalón'. Luego en 2001, habría ingresado al noroccidente de Cundinamarca con apoyo del 'El Águila', pero tiempo después comenzó a actuar de manera independiente, adquiriendo el control sobre el hurto de combustible de poliducto que abastece a Bogotá. Según el Grupo Hidrocarburos de la DIJIN, entre 15 y 20% de la gasolina robada se usa como insumo para procesar coca. En diciembre de 2004, cuando tuvo lugar la desmovilización de las Autodefensas de Cundinamarca, el “Pajaro” se mantuvo marginado del proceso.

En diciembre de 2004, con Cifuentes desmovilizado, 'El Pájaro' comenzó a extenderse hacia la provincia de Rionegro y a hacer más evidente la producción de alcaloides, que, según las autoridades, comercializa Diego Montoya Henao, 'Don Diego', uno de los narcos del cartel del Norte del Valle. En el presente actúa solo y tiene más de 300 hombres bajo su mando. En el área que controla se ha detectado la operación de numerosos laboratorios de estupefacientes, relacionados con organizaciones que involucran con clanes regionales particularmente con vínculos con Yacopí, La Palma, Valle de Tenza, y los departamentos de Meta y Casanare⁶⁶.

Así las cosas, no es probable que el control que aparentemente ha logrado consolidar “Jorge Pirata” sobre Bogotá en cuanto tiene que ver con el negocio de los estupefacientes y el lavado de dinero, vaya a ser una situación estable hacia el futuro. De una parte dado los nexos entre los clanes delictivos del noroccidente de Cundinamarca con Meta y Casanare, no puede descartarse en este ambiente de gran fluidez que se vive dentro de grupos paramilitares a raíz del proceso en marcha entre las AUC y el gobierno la posibilidad de un alianza entre el “Pájaro” y “Martín Llanos”, dos de las cabezas más renuentes frente a las negociaciones de desmovilización que adelanta las AUC, para entrar a disputar la hegemonía de “Jorge Pirata” en Bogotá.⁶⁷ Como tampoco puede descartarse la posibilidad que en algún momento en el futuro las estructuras de la FARC que en la actualidad están en proceso de reagrupamiento en Cundinamarca, vuelvan a actuar. Si bien Bogotá no es un escenario probable para que ello suceda, no sucede lo mismo con el noroccidente de Cundinamarca, que representa un corredor de movilidad y comunicación estratégico para articular el dispositivo militar de la FARC en el centro del país.

⁶⁶ "Le hemos seguido la pista desde el año pasado. Tiene unas ocho fincas y ya le hemos incautado más de una tonelada de cocaína y unos 15.000 galones de químicos", asegura el coronel Yesid Vásquez, comandante de Policía de Cundinamarca. Ver "El 'Pájaro' jefe paramilitar de Guaduas (Cundinamarca), no es como lo pintan", *El Tiempo*, Oct. 8 de 2005.

⁶⁷ No hay que olvidar que uno de los principales iniciadores del paramilitarismo en el centro del país, junto con el difunto Gonzalo Rodríguez Gacha y Ramón Isaza, es Víctor Carranza. Además de controlar la zona de producción esmeraldífera en el occidente de Boyacá, Carranza ha invertido en la compra de grandes extensiones de tierras en Meta y Casanare. Informantes locales manifiestan que en el pasado Carranza y “Martín Llanos” fueron aliados. De otra parte también conviene señalar que en la zona periférica compartida entre Ciudad Bolívar en Bogotá y Altos de Cazuca en Soacha hay establecida una colonia de gentes oriundas del noroccidente de Cundinamarca, particularmente de Yacopí y La Palma. Puntualmente el barrio Caracolí en Ciudad Bolívar, al igual que Los Robles y El Oasis en Altos de Cazuca hay una concentración de familias que provienen de esos municipios. Curiosamente, cuentan que Rafael Forero Fetecua, exconcejal de Bogotá y urbanizador “pirata” de barrios como Los Robles y El Oasis en Altos de Cazuca, recurrió a un grupo de paramilitares del sector del occidente de Boyacá y noroccidente de Cundinamarca para que sirvieran de “cobradores” y “garantes del orden” cuando recién se inició la urbanización de esos barrios.

6.2 ¿Y del proyecto político de las AUC en Cundinamarca y Bogotá, qué?

“Hay una amistad con los políticos en las zonas en donde operamos. Hay relaciones directas entre los comandantes y los políticos y se forman alianzas que son innegables. Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías.”⁶⁸

Así se expresó Vicente Castaño en una entrevista reciente, cuando se le preguntó acerca de la penetración paramilitar en la política. Y a renglón seguido señaló que una de las principales motivaciones para concluir la desmovilización paramilitar antes de diciembre de 2005, es que de ese modo las AUC pueden restar credibilidad a los adversarios que durante la próxima campaña electoral intenten acusar a sus candidatos utilizar amenazas en su contra para coaccionar el libre proselitismo político.

Hasta unos meses antes del inicio formal de las campañas electorales para el Congreso y la presidencia del 2006, en Bogotá y Cundinamarca esta es una consigna que aparentemente se cumple, aún con el dismantelamiento del Frente Capital de las AUC y el control de que presuntamente ejercen “Jorge Pirata” y el “Pájaro” sobre los sectores neurálgicos para los negocios ilegales en la región. Aparentemente hay consenso en torno a la conveniencia de actuar sobre estructuras como las Juntas de Acción Comunal, las Juntas Administradoras Locales y, en general, las organizaciones comunitarias impulsadas por ONGs dedicadas a la promoción y organización comunitaria, a fin de ejercer influencia y liderazgo en las comunidades, y generar condiciones propicias para que sus representantes lleguen a instancias de representación política.

Como es de esperarse, en este nuevo horizonte de acción política, para los grupos paramilitares en la región ganan importancia las “redes de inteligencia”; para mantener el control, acopiar información sobre las zonas que les interesa controlar, disputarle terreno a las organizaciones sociales con influencia, simpatía o vínculos con la izquierda democrática y camuflarse entre las “redes de informantes” para entorpecer la acción de adversarios políticos y contradictores a través del señalamiento y la estigmatización.

En el caso de Soacha, esta modalidad comenzó a configurarse a partir del 2004, cuando se conocen públicamente casos de reclutamiento de jóvenes en el sector de Casa Loma (barrio ubicado en el límite de las localidades bogotanas de Bosa y Ciudad Bolívar). De acuerdo con informantes locales, jóvenes de este sector son llevados a campamentos en el departamento del Meta, donde reciben adiestramiento militar y capacitación en el manejo de tácticas de inteligencia para luego ser retornados a sus barrios de origen con el fin de que se incorporen a programas oficiales como los “*Frentes de Seguridad Ciudadana*” y las “*Redes de Informantes*”, para que sirvan de “*orejas*” y “*ojos*”. Eventualmente estas mismas unidades podrían cumplir actividades de tipo sicarial cuando los mandos locales lo consideren pertinente.

¿Será el año electoral de 2006 un año de violencia comparable a la que se presencié en Bogotá y Cundinamarca en el anterior año electoral de 2002? Dada la fluidez de la situación de los diversos grupos paramilitares con influencia en la región frente al proceso de desmovilización de las AUC, el pronóstico no puede ser sino reservado. 

⁶⁸ Ver “Habla Vicente Castaño”, *Revista Semana*, No. 1205, junio 8 de 2005.